

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



UDH
UNIVERSIDAD DE HUANUCO
<http://www.udh.edu.pe>

TESIS

**“EL DERECHO DE CONTRADICCION DE LA PERSONA
DENUNCIADA EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA
DE MEDIDAS DE PROTECCION DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA LEY 30364, EN EL PLAZO MAXIMO
DE SETENTA Y DOS HORAS EN EL PRIMER JUZGADO
DE FAMILIA DE HUÁNUCO, 2018”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR: Lopez Atencia, Isaias

ASESOR: Dominique Palacios, Luis

HUÁNUCO – PERÚ

2021

U

TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional ()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo de estudios en derechos sustantivos y procesales en constitucional, civil, penal, laboral, tributario, administrativo y empresarial

AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2018-2019)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias sociales

Sub área: Derecho

Disciplina: Derecho

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Abogado

Código del Programa: P33

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22513401

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 01306524

Grado/Título: Doctor en derecho

Código ORCID: 0000-0003-0789-4628

DATOS DE LOS JURADOS:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Carbajal Alvarado, Elí	Magister en derecho y ciencias políticas derecho del trabajo y seguridad social	22405621	0000-0001-9901-1225
2	Sánchez Dávila, Flor de María	Magister en derecho y ciencias políticas derecho procesal	41922223	0000-0003-0355-0238
3	Delgado Y Manzano, Jesus	Abogado	22409401	0000-0002-6776-6292

D

H

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 09:10 horas del día 20 del mes de Octubre del año dos mil veintiuno, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron el Sustentante y el Jurado calificador mediante plataforma virtual Google meet integrado por los docentes:


> Mtro. Eli CARBAJAL ALVARADO	: PRESIDENTE
> Mtra. Flor de Maria SANCHEZ DAVILA	: SECRETARIA
> Abog. Jesús DELGADO Y MANZANO	: VOCAL
> Mtro. Alfredo MARTEL SANTIAGO	: JURADO A CREDITARIO
> Mtro. Luis DOMINIQUE PALACIOS	: ASESOR


Nombrados mediante la Resolución N° 1539-2021-DFD-UDH de fecha 18 de Octubre del 2021, para evaluar la Tesis intitulada: : **"EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIADA EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 30364, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO, 2018"**; presentado por el Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, ISAIAS LOPEZ ATENCIA para optar el Título profesional de Abogado.


Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) **APROBADO** por **UNANIMIDAD** con el calificativo cuantitativo de DIECISEIS y cualitativo de BUENO.

Siendo las 10:15 horas del día 20 del mes de Octubre del año dos mil veintiuno los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.


Mtro. Eli Carbajal Alvarado
Presidente


Mtra. Flor de Maria Sánchez Dávila
Secretaria


Abog. Jesús Delgado y Manzano
Vocal

RESOLUCIÓN N° 1539-2021-DFD-UDH
Huánuco, 18 de octubre del 2021

Visto, la solicitud con ID: 000003232, **presentado** por el Bachiller **ISAIAS LOPEZ ATENCIA** quien solicita se ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado: **“EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIADA EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 30364, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO, 2018”;**

CONSIDERANDO:

Que, según Resolución N° 1114-21-DFD-UDH de fecha 19/AGO/21 se nombran Jurados revisores del Informe Final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) a los docentes Mtro. Eli CARBAJAL ALVARADO, Mtra. Flor de María SÁNCHEZ DÁVILA y Abog. Jesús DELGADO Y MANZANO;

Que, mediante Resolución N° 1423-2021-DFD-UDH de fecha 29/SET/21 se aprueba el Informe Final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **“EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIADA EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 30364, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO, 2018”** del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco;

Que, con Resolución N° 1474-21-DFD-UDH de fecha 06/OCT/21 se declara apto al Bachiller para sustentar la tesis.

Que, debido al estado de Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del COVID-19 la Sustentación de la Tesis se hará de manera virtual cumpliendo con las exigencias del Reglamento de Grados y Títulos;

Estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y Títulos a lo establecido en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 3220; inc. N) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco y la Facultad contemplada en la Resolución N° 795-18-R-CU-UDH de fecha 13/JUL/18 y Resolución N° 001-2021-R-AU-UDH del 05/ENE/21;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR Y DESIGNAR a los miembros del Jurado calificador de Tesis para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco **ISAIAS LOPEZ ATENCIA** para optar el Título Profesional de Abogado por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) a los siguientes docentes:

- Mtro. Eli CARBAJAL ALVARADO
- Mtra. Flor de María SANCHEZ DAVILA
- Abog. Jesús DELGADO Y MANZANO

PRESIDENTE
SECRETARIA
VOCAL

- Mtro. Alfredo MARTEL SANTIAGO
- Mtro. Luis DOMINIQUE PALACIOS

**JURADO ACCESITARIO
ASESOR**

El acto de Sustentación se realizará el día 20 de Octubre del año 2021 a horas 9.00 am, mediante la Plataforma Virtual Google meet.

Regístrese, comuníquese y archívese



DEDICATORIA.

A mis apreciados y valorados padres que siempre han estado conmigo en mis triunfos y derrotas dándome esa fortaleza para nunca rendirme, a mis queridos y apreciados hijos por la comprensión inmensa y apoyo incondicional, a mis querido hermanos por siempre estar para mí y sobre todo siempre confiar en mí, y por último a dios por la bendición inmensa que derrama en mi hogar

Isaías

AGRADECIMIENTO.

Mi agradecimiento profundo a:

Mi universidad de Huánuco por todo el aprendizaje brindado, por los valores y enseñanzas constante asimismo a mis queridos y apreciados docentes que día a día me han inculcado como ser una buena persona y sobre todo como ser un buen profesional con ética.

A mi asesor y a mi exjurado de que en vida por brindarme sus conocimientos y enseñanzas y sobre todo que siempre creyeron en la culminación de este proyecto de vida.

Isaías.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO.....	III
ÍNDICE.....	IV
ÍNDICE DE CUADROS.....	VI
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	VII
RESUMEN.....	VIII
SUMMARY.....	IX
INTRODUCCIÓN.....	X
CAPÍTULO I.....	11
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	11
1.1. Descripción del Problema.....	11
1.2. Formulación del Problema.....	12
1.3. Objetivo General.....	13
1.4. Objetivos Específicos.....	13
1.5. Justificación de la Investigación.....	13
1.6. Limitaciones de la Investigación.....	14
1.7. Viabilidad de la Investigación.....	14
CAPÍTULO II.....	15
MARCO TEÓRICO.....	15
2.1. Antecedentes de la Investigación.....	15
2.2. Bases Teóricas.....	19
2.2.1. De la variable independiente:.....	19
2.2.2. De la variable dependiente:.....	31
2.1. Definiciones Conceptuales.....	56
2.4. Sistemas de Hipótesis.....	56
2.5. Sistema de Variables.....	57

2.5.1 Variable Independiente.....	57
2.5.2 Variable Independiente.....	57
CAPÍTULO III.....	59
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	59
3.1. Tipo de Investigación	59
3.1.1. Enfoque.....	59
3.1.2. Alcance o Nivel.....	59
3.1.3. Diseño	59
3.2. Población y Muestra	59
3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	60
3.4. Técnicas para el Procesamiento de Análisis de la Información	60
CAPÍTULO IV.....	62
RESULTADOS.....	62
4.1. Relato y descripción de la realidad observada.....	62
4.2. Procesamiento de Datos.....	63
4.3. Contrastación de Hipótesis y Prueba de Hipótesis	70
CAPÍTULO V.....	72
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	72
5.1. Contrastación de los Resultados del Trabajo de Investigación.....	72
CAPITULO VI.....	73
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	73
6.1. Conclusiones	73
6.2. Recomendaciones	74
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	75
ANEXOS	77

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Muestra de los expedientes analizados sobre violencia familiar	63
Cuadro 2 Muestra de análisis a los expedientes sobre violencia familiar acerca de la variable dependiente.	65
Cuadro 3 Muestra acerca de la notificación al denunciado por violencia familiar.	67
Cuadro 4 Muestra acerca de la asistencia del denunciado en la audiencia de medidas de protección.	69

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Muestra acerca de la notificación al denunciado por violencia familiar.....	67
Gráfico 2 Muestra acerca de la asistencia del denunciado en la audiencia de medidas de protección.....	69

RESUMEN

La presente tesis refiere al derecho de defensa del imputado en la audiencia de medidas cautelares prevista en el artículo 16 de la Ley N° 30364. El plazo máximo de la primera audiencia es de 72 horas. Familia de Huánuco, 2018, su contenido se divide en cinco partes: El Capítulo 1 es una descripción de los derechos contradictorios del imputado en la audiencia de las medidas de protección estipuladas en el artículo 16 de la Ley No. 30364. La autorregulación muestra que la El juzgado de familia tiene el derecho de convocar el juzgado, para las audiencias en las que la víctima sea la única responsable o no, no es necesario mencionar al denunciado, sino solo indicar si considera necesario entrevistar al denunciado.

El Capítulo 3 se ha vuelto factible en términos de tipos sustantivos de métodos de investigación. Se basa en una descripción del período de tiempo de los documentos sobre violencia intrafamiliar tramitados por el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial en 2018. La resolución no dispuso el traslado del imputado a los cargos que se le imputan. Para ejercer su derecho de refutación en la audiencia, su muestra constituía seis documentos sobre violencia intrafamiliar tramitados por el Juzgado Primero de Familia del Distrito Judicial en 2018, y designado Muestra. El cuarto capítulo son los resultados de la encuesta formados a través del procesamiento de datos, comparación y prueba de hipótesis.

Y llegado a un clímax en el Capítulo 5, se ha desarrollado la discusión de los resultados, y finalmente las conclusiones, recomendaciones y bibliografía, la conclusión final más relevante en la investigación es que los derechos contradictorios del condenado no afectarán significativamente la audiencia de Ley 30364 No. 16 Para las medidas de protección estipuladas en este artículo, el plazo máximo en el Juzgado Primero de Familia de Huánuco en 2018 es de 72 horas.

SUMMARY

This thesis refers to the defendant's right of defense in the hearing of precautionary measures provided for in article 16 of Law No. 30364. The maximum term of the first hearing is 72 hours. Familia de Huánuco, 2018, its content is divided into five parts: Chapter 1 is a description of the contradictory rights of the accused at the hearing of the protection measures stipulated in article 16 of Law No. 30364. Self-regulation shows that The family court has the right to convene the court, for hearings in which the victim is solely responsible or not, it is not necessary to mention the accused, but only indicate whether it considers it necessary to interview the accused.

Chapter 3 has become feasible in terms of substantive types of research methods. It is based on a description of the time period of the documents on domestic violence processed by the First Family Court of the Judicial District in 2018. The resolution did not provide for the transfer of the accused to the charges against him. To exercise his right of refutation at the hearing, his sample consisted of six documents on domestic violence processed by the First Family Court of the Judicial District in 2018, and designated Sample. The fourth chapter is the survey results formed through data processing, comparison, and hypothesis testing.

And reached a climax in Chapter 5, the discussion of the results has been developed, and finally the conclusions, recommendations and bibliography, the most relevant final conclusion in the investigation is that the contradictory rights of the convicted person will not significantly affect the hearing of the Law. 30364 No. 16 For the protection measures stipulated in this article, the maximum term in the First Family Court of Huánuco in 2018 is 72 hours.

INTRODUCCIÓN

La presente consiste en el derecho de contradicción de la persona denunciada en la efectuación de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia por lo que buscaremos una solución a la problemática.

En cuanto a la formulación del problema, hemos realizado el siguiente trabajo: ¿Cómo afecta el derecho de contradicción del imputado a la implementación de las audiencias de medidas cautelares estipuladas en el artículo 16 de la Ley No? 30364, el plazo máximo es de 72 horas, Juzgado Primero de Familia de Huánuco, ¿2018 año? Por tanto, la investigación se justifica porque nos permite calificar e interpretar legalmente la vulneración del derecho de defensa del imputado en la audiencia de las medidas de protección previstas en el artículo 16 de la Ley N ° 30364 y restar importancia a los procedimientos. La notificación exigida por la ley se limita al envío del certificado de notificación, de modo que el objeto del procedimiento de notificación pueda ser cumplido el mismo día y bajo circunstancias responsables.

Los objetivos se centran a detallar el grado de incidencia del derecho de contradicción de la persona denunciada en la ejecución de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, , empleándose para tal efecto el método y técnica aplicada, y como base la descripción en el tiempo de expedientes sobre violencia familiar, las fuentes de información fueron recopiladas en las bibliotecas principales de la ciudad de Huánuco y por último se ha terminado en las recomendaciones.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del Problema

La presente investigación trata sobre la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a la interposición de la denuncia y su incidencia con el derecho de contradicción del denunciado en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.

El artículo 16 de la presente ley tienen como finalidad prevenir, sancionar y suprimir la violencia contra las mujeres y los integrantes de un grupo familiar señalando en el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes de interponer la denuncia, el Juzgado de Familia o semejante sigue a estudiar el caso y soluciona en audiencia oral la transmisión de las medidas de protección solicitadas que sean necesarias.

Por consiguiente, de oficio o a pedido de la víctima, en la audiencia oral se vocaliza sobre medidas cautelares que protegen pretensiones de alimentos, tenencia, liquidación de régimen patrimonial, suspensión o extinción de la patria potestad, regímenes de visitas, y otros aspectos ligados que son fundamentales para asegurar los derechos y bienestar de las víctimas.

Según el artículo 35 del Reglamento de la Ley 30364 nos hace mención que el juzgado de familia puede imponer una audiencia con la sola presencia ya sea de las víctimas o sin ellas en un plazo de 72 horas según la ley, asimismo se consideran para el computo de los plazos la gran dificultad que en las zonas rurales.

En ese sentido la presente investigación recae sobre la incidencia del derecho de contradicción del denunciado en la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, ya que la norma señala que el Juzgado de Familia puede realizar audiencia con la sola presencia de las víctimas o sin ellas, sin hacer referencia a la parte

denunciada, limitándose solo con indicar si considera necesaria entrevista a la persona denunciada.

Por lo que con la presente investigaciones tenemos como finalidad que se obtengan y brinden mecanismos para poder garantizar el derecho de contradicción de la persona denunciada, poniendo a su conocimiento los cargos que se le atribuyen, para que en la audiencia se actúen los medios probatorios que ofrezca su defensa, ya que el Reglamento de la Ley 30364 no prevé en la notificación de la persona denunciada el traslado de la denuncia para una efectiva defensa.

Asimismo, en la resolución que admite a trámite la denuncia interpuesta por la denunciante sobre actos de violencia familiar, limitándose con remitir cédulas de notificación a la jefa de la Central de Notificaciones de la Corte Superior para que en el día y bajo responsabilidad cumpla con notificar a los sujetos procesales para garantizar mínimamente su derecho de la persona denunciada.

1.2. Formulación del Problema

Problema General

¿Cómo incidirá el derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018?

Problemas Específicos

¿Cuál es el nivel de eficacia logrado del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018?

¿Qué tan frecuentes han sido la aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018?

1.3. Objetivo General

Demostrar el grado de incidencia del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.

1.4. Objetivos Específicos

Determinar el nivel de eficacia logrado del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.

Identificar el nivel de frecuencia de aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.

1.5. Justificación de la Investigación

La presente investigación tuvo su justificación en el marco teórico ya que no se está respetando la ley 30364 de la ley 16 por lo que buscamos una solución, asimismo tuvo su justificación dentro de la practica ya que consideramos trascendente en el aspecto de hacer conocer a los letrados, auxiliares jurisdiccionales y estudiantes de la facultad de derecho, especialmente en materia de familia - violencia familiar ya que

el derecho de contradicción de la persona denunciada se estaría vulnerado al no disponer correr traslado de los cargos que se le atribuye con la resolución que admite a trámite la denuncia interpuesta sobre actos de violencia familiar, al disponer solo la notificación de la citada resolución.

1.6. Limitaciones de la Investigación

Tenemos las siguientes limitaciones:

- El acceso limitado a la información acerca de nuestra problemática de la presente investigación en las diversas bibliotecas de la ciudad de Huánuco ya que no cuentan con información actualizado por el motivo del cual adoptamos fuentes privadas.
- Poca información acerca del tema estudiado.
- Por el acceso en forma relativa a la información a los expedientes.

1.7. Viabilidad de la Investigación

La presente investigación es viable gracias a que se obtuvieron informaciones sobre lo investigado, aunque de forma limitada tanto sobre los documentos bibliográficos, hemerográficos, así como los expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar, asimismo porque contamos con diversos expertos en materia de derecho de familia tutelar en la ciudad de Huánuco.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

Se han encontrado los siguientes antecedentes.

Nivel Internacional

A nivel internacional, existen estudios relacionados al derecho de contradicción de la persona denunciada en las audiencias de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364.

Título: *Amado Huete, M. (2010). "EFECTOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD, QUE SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS HOGARES DEL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ACHUAPA, DEPARTAMENTO DE LEÓN, EN EL PERÍODO DE MARZO A OCTUBRE DE 2009".* Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. Para optar al título de abogado, Por lo que el autor de la presente ha llegado a las siguientes conclusiones:

“La Violencia que más sufren niños y niñas en los hogares en el barrio Guadalupe es la física presentada a través de moretones, jalones de pelo, cicatrices y dentro de la psicológica están la depresión, hiperactividad, rebeldía entre otros.

Los niños y las niñas de 6 a 12 años de edad del barrio Guadalupe del municipio de Achuapa que participaron del estudio son violentados por sus padres/ madres.

La población encuestada en la investigación en su mayoría son madres solteras y por ende jefes de familias y son las que más violentan, seguido de los padres y/o padrastros.

El estudio nos permite caracterizar a los padres y madres de familias que violentan a sus hijos e hijas quienes son personas Alcohólicos, tienen

bajo nivel académico, familias con muchos números de personas, están desempleados y machistas...

Los niños y niñas víctimas de violencia no conocen las instituciones que protegen sus derechos ni conocen el marco jurídico que los protege. (Código de la niñez y adolescencia)

El nivel de conocimiento de las personas en estudio sobre que Institución puede ayudar en caso que sufran violencia intrafamiliar es muy poco, mientras que las instituciones dicen que la población conoce suficiente sobre el trabajo que ellas desempeñan.

Las instituciones que abordan la violencia intrafamiliar en el Municipio de Achuapa, desarrollan la función de atención ante el delito y protectora y no de manera preventiva”.

Comentario: La presente tesis refiere que los niños tienen más violencias psicológicas y físicas a diferencia de otros por lo que se puede percibir de acuerdo a los moretones que estas causan asimismo encontramos a niños que tienen graves problemas mentales es decir desorden mental gracias a la vivencia con malos valores por lo que esto afectara gravemente a su futuro.

Nivel Nacional

Se ha obtenido, acerca de la investigación, antecedentes indirectos como es el caso de:

Título: *“CRITERIOS ADOPTADOS POR LOS JUECES PARA DICTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY 30364 EN LA PROVINCIA DEL SANTA 2017”*. Autor: Dafne Alexis CORREA ABANTO. Año: 2017. Universidad: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO. Para optar el título profesional de Abogado.

La RVF es el otro estándar más relevante utilizado por los jueces a la hora de dictar medidas de protección a las víctimas. No es más que una herramienta para que los operadores del sistema judicial reciban

denuncias. El expediente contiene una serie de datos sobre violencia intrafamiliar.

Deben indicar la cuenta única de la víctima en cada ítem, y finalmente todas las puntuaciones en función de su ubicación. Intervalo, dar su propia evaluación. El propósito de esto es detectar y medir los riesgos que enfrenta la víctima en relación con el imputado.

-Según los estándares establecidos, los elementos a los que los jueces le dan importancia en la evaluación psicológica son: vulnerabilidad y factores de riesgo, influencia emocional y sugerencias. Por su parte, las leyes médicas prueban que la identificación y descripción de las características de las lesiones causadas por la violencia doméstica pueden ser lesiones leves o graves.

Comentario:

El autor de la investigación concluye señalando que las medidas de protección que deben ser pertinentes es una evaluación psicológica ya que esta tiene estrecha relación con la víctima, asimismo evaluar el riesgo para dictar una buena medida de protección a favor de la víctima.

Nivel Local

Se ha encontrado antecedentes indirectos, con relación al derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364.

Título: *“EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA DE LA LEY N° 30364, EN LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, PERIODO NOVIEMBRE 2015 – MARZO 2016”*. Autor: Darwin BRAVO VECORENA. Año: 2018. Universidad: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO. Para optar el título profesional de Abogado.

Por la que se presenta las siguientes conclusiones:

“1° Se ha logrado conocer que cuando las víctimas de agresión psicológica por violencia familiar interponen su denuncia, lo hacen porque tienen expectativas que el Estado les brinde protección mediante un proceso rápido que asegure su defensa frente al agresor, el mismo que sancione y permita de modo objetivo el resarcimiento de daños causados, expectativas que se ven frustradas cuando, como lo que ocurre en realidad, las denuncias por agresión psicológica, en tanto no exista el Protocolo de Graduación de daño psicológico han estado siendo archivadas en las Fiscalías Penales.

2° Se ha logrado determinar que, frente al archivamiento de la investigación por parte de las fiscalías penales, respecto a las denuncias por agresión psicológica por violencia familiar, ha generado en la víctimas una sensación de desprotección e indefensión, pero además un descrédito de las instituciones de justicia y que la Ley N° 30364 no ha superado a la anterior.

3° Las víctimas de agresión psicológica por violencia familiar, han considerado que para evitar la sensación de indefensión valorar las medidas que debe adoptar el Estado para evitar situaciones de indefensión, el Fiscal debería remitir los actuados al Juzgado de Paz Letrado, en tanto que no exista graduación del daño psicológico, para ser tramitado en todo caso como falta contra la persona – maltrato de obra, (72.3% de la muestra); mientras que el 21.3% consideró que el Juez de Familia debe conocer la demanda por agresión psicológica y el 6.4% que el fiscal suspenda la investigación hasta la vigencia de protocolo de pericia psicológica”.

Comentario:

Sobre la investigación descrita precedentemente debemos realizar el siguiente comentario: El autor señala que en tanto no exista el Protocolo de Graduación de daño psicológico, los casos se están archivando en las Fiscalía que conocen de la investigación generando desprotección e

indefensión, sin embargo, al tiempo de la sustentación estos esto en el año 2018, las fiscalías ya contaban con el protocolo de daño psicológico.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1 De la variable independiente: El derecho de contradicción de la persona denunciada.

A. El principio de contradicción o principio contradictorio.

En derecho procesal, es el principio jurídico básico de los procedimientos judiciales modernos. Esto significa que las partes que ocupan posiciones jurídicas opuestas deben estar dualizadas, de modo que el tribunal responsable de dirigir el caso y dictar sentencias no ocupe ningún lugar en el litigio, de modo que el tribunal solo pueda llevar a cabo un juicio justo basado en requisitos y cargos. Componentes.

Por lo que este principio hace mención una controversia entre dos partes contrarias que son el demandado y demandante por lo que el juez llegaría ser un árbitro dentro del conflicto.

Asimismo, en el sistema jurídico anglosajón, este principio suele aplicarse también al campo del derecho penal, y el demandante era la fiscalía en ese momento. El juez volverá a ser parte independiente del procedimiento.

En contrario, el principio de autocontradicción requiere que ambas partes que tengan los mismos derechos de audiencia y recolección de pruebas, de modo que las partes pueda defenderse de la otra. Requiere igualdad.

En nuestro orden de procedimiento civil, en todo caso, existen principios contradictorios en todos los procedimientos. De esta manera, la existencia de contradicciones constituye la distinción esencial entre la denominada jurisdicción "voluntaria" y la jurisdicción "controvertida", principio que está implícito en todas

las acciones del litigio civil, ya sea de acusación o de prueba. Es la etapa de conclusión.

La excepción al principio de audiencia no puede considerarse como una característica del proceso de ejecución, que dará lugar a la ejecución y la incautación de los bienes del deudor antes de que se confisque la propiedad del deudor, porque este comportamiento se debe a la necesidad de evitar la frustración del deudor. Al final del proceso, cuente el número de ejecuciones y puede oponerse a la ejecución.

B. El derecho de contradicción. La excepción.

El derecho a la contradicción se refiere al derecho que debe gozar todo sujeto de una persona natural o jurídica. Se fundamenta en el hecho de que actúan o enjuician mediante hechos simples, o son acusados o combinados para la realización de conductas punibles, por indemnización o acusación (Excepción) defensa. Este derecho es una manifestación del derecho de defensa constitucional y debe ocupar una posición dominante en todos los procedimientos legales, por lo que el derecho de contradicción es en protección y respuesta del demandado.

De esta forma, el derecho de contradicción, como el derecho de litigio, se fundamenta en intereses generales, porque no se centra específicamente en la defensa del imputado o imputado, sino que respeta y respeta los intereses públicos que no pueden vulnerar los principios de la Constitución. En el plano de la igualdad de oportunidades y de derechos, no fue escuchado primero y no se le brindaron medios de defensa suficientes, pero negó tener derecho a la justicia.

DEVIS ECHANDÍA, refiere que el derecho de contradicción, como el derecho a ser juzgado en igualdad de oportunidades, a través de la sentencia que deba ejecutarse en el proceso, el

derecho a obtener la demanda sometida al imputado o el derecho a justificar la atribución del imputado para defender, defender, probar y Archivar los recursos que establece la ley.

Ugo Rocco, citado por AZULA CAMACHO, refiere que es aquel derecho amparado en la constitución que ampara y protege al demandado.

C. Objeto del derecho de contradicción.

En cuanto al propósito de este derecho de contradicción, hemos descubierto que no se trata de perseguir una tutela específica a través de una sentencia (excepción) a favor del acusado o del acusado, sino de abstraer la tutela mediante un juicio justo y legal. No importa cuál sea, hay oportunidades La voz que se escucha durante el ejercicio del derecho a la defensa en igualdad de condiciones, potestades y cargas (efectos negativos).

D. Finalidad del derecho de contradicción

En términos de propósito, persigue la justicia por un lado y satisface los intereses públicos por el otro. Por otro lado, protege el derecho a la defensa constitucional y la libertad personal.

E. Derechos que emanan de la contradicción

Partiendo de derechos contradictorios, determinados derechos de los que disfruta el demandado, es decir, determinados derechos de los que disfruta el demandante, pueden concretarse en los siguientes puntos:

Pasiva: El acusado se limitó a recibir citaciones, "avisos o citaciones" y esperar el resultado del proceso sin tomar ninguna defensa.

Oposición: Los derechos ejercidos por el demandado para invalidar el reclamo del demandante pueden tomar la forma de objeción o excepción. En primer lugar, el demandado se limita a entrar en conflicto con el reclamo en el que se basa el reclamo del demandante; en el segundo caso, es decir, en circunstancias excepcionales (como se verá más adelante), el demandado invoca otros hechos diferentes en los que se basa el reclamo del demandante. Apoya su defensa.

Allanamiento: Esto sucede cuando el demandado está de acuerdo o acepta todas las reclamaciones del demandante de hecho o en los derechos invocados

Impedimentos procesales: A ella se opusieron los imputados que pretendían depurar el proceso o impedir su avance, como el tema anterior mencionado en el artículo 346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

F. La excepción o defensa

Este es un tipo de reclamo que el demandado puede hacer sobre los reclamos del demandante, y sobre esta base puede solicitar al juez que rechace o declare inadmisibles los reclamos del demandante; este es un derecho específico de contradicción.

El derecho de contradicción (causa) no se puede confundir con el derecho de defensa o el derecho de excepción (resultado), porque el primero siempre existe, aunque no se exprese. Los reclamos negativos son una excepción.

La excepción, señala CARNELUTTI, citado por AZULA CAMACHO, que refiere que lo puesto del demandante son las propias razones del demandado; esto es una consideración de formar sus propios argumentos basados en diferentes hechos, que a menudo hacen insostenibles las afirmaciones del demandante.

G. Clasificación de las excepciones

De acuerdo con nuestra Ley de Procedimiento Civil, estas excepciones se pueden dividir en las siguientes categorías:

Previas o dilatorias: Son procesos que tienden a eliminar o depurar defectos o vicios que pueden dificultar su posterior desarrollo, como los problemas mencionados en la Rutina 1, 2, 3, 4, 5 y 5. Artículo 346, inciso 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Inadmisibilidad: Se refiere a quienes rechazan el procedimiento e impiden o imponen una sentencia, que puede perturbar el litigio, como las cuestiones anteriores mencionadas en los artículos 346, 9, 10 y 11 del Código. Procesos civiles.

Perentorias o definitivas: Nos ayuda a descubrir la pretensión.

Impeditivas o invalidativas: Aquellas conductas que ignoran derechos materiales por hechos como el nacimiento de derechos materiales, como contratos firmados por menores o personas discapacitadas;

Modificativas: Esas formas de otorgar derechos o relaciones jurídicas son diferentes a las otorgadas por el demandante. Por ejemplo, las partes exigen la existencia de un contrato de arrendamiento y el demandado se opone a la existencia de un préstamo; o el demandante solicita una determinada cantidad de compensación y el demandado se opone a la donación; y

Extintiva: Este hecho ocurrió luego del reconocimiento de la obligación por parte del imputado, se refiere a un hecho que implica su extinción, como el pago, indemnización, prescripción, confusión, etc.

H. El Derecho de contradicción

Como señaló Gimeno Sendra, este derecho implica la posibilidad efectiva de exigir a las partes, el demandante y el demandado o demandado, comparecer o ingresar efectivamente a la jurisdicción para hacer cumplir sus respectivos reclamos mediante la introducción de hechos que los respalden. Y sus correspondientes convenciones probatorias, y el imputado admitido tiene derecho a expresar opiniones antes de ser sentenciado.

En primer lugar, hay que aclarar este punto, porque el ejercicio efectivo del derecho de contradicción requiere de otro derecho como base, el derecho a la igualdad procesal. Este principio debe ser respetado en cuanto a las posibilidades procesales de las denuncias y los aspectos que son importantes para las actividades y recursos probatorios.

En el caso de legisladores que crean privilegios procesales que carecen de base constitucional (por ejemplo, en el caso de establecer una jurisdicción especial para juzgar casos con base humana), o en el caso de legisladores, se viola este derecho, o el propio tribunal. Sin obtener ninguna justificación objetiva y razonable, crea la posibilidad de ser rechazado por la otra parte o sobrecargar el procedimiento.

Por otro lado, como en el caso del derecho general de defensa, el desarrollo de este tipo de garantía dará lugar a una serie de garantías específicas y coherentes, por lo que efectivamente existe la posibilidad de contradicción en cada caso.

- El imputado debe ser notificado de las actuaciones procesales en cualquier momento desde el inicio del proceso penal. Lo que hace que la adecuada notificación de las decisiones judiciales sea una condición necesaria para el ejercicio del derecho de defensa, porque es así como el plan debe cumplir con los requisitos de inteligencia.

- Siguió los requisitos anteriores, pero ganó independencia por su importancia, el derecho a ser acusado y a ser informado en su momento.

El imputado debe reclamar su derecho de defensa contradiciendo los cargos que se le imputan, pero para ello debe conocer el contenido de su defensa, pues no podrá defenderse adecuadamente de lo que no comprende. No conocer los hechos de la acusación lo cegará y tratará de defender la agresión de su oponente.

En cuanto a la información de la acusación, este derecho es más importante que nunca, porque en este momento, el hecho delictivo se ejerce realmente, los hechos están contenidos y veremos que su calificación determina la declaración final del juez.

La palabra entrenador significa "entrenador", en un entrenador es alguien que es responsable de aprovechar al máximo su la posibilidad de alcanzar los objetivos que te propongas. tal, Los entrenadores son profesionales que utilizan una variedad de técnicas y herramientas, Intente aprovechar al máximo a todos para Los objetivos establecidos se pueden lograr. Para esto, por favor concéntrate Las personas tienen un pensamiento claro y habilidades mejoradas Comunicación y relación interpersonal, y desarrollar fuertes Motivación para una lucha eficaz Consigan lo que quieren.

- El imputado también tiene el derecho de defenderse y usar sus medios de descargo

Cabe aclarar que este derecho no garantiza que se puedan realizar todas las pruebas que deben ser realizadas por todas las partes, sino que solo garantiza que sean pruebas pertinentes y necesarias.

Se requiere que la prueba propuesta esté relacionada con el propósito del procedimiento y el tema de la decisión del tribunal, y exprese la capacidad de influir en la condena del órgano decisorio a fin de determinar los hechos que pueden ser importantes para la decisión.

Sin embargo, es necesario señalar que el Comité Técnico Español ha anunciado que, sobre este tema, es mejor admitir pruebas más que posibles vetos.

- El ejercicio efectivo del derecho de defensa requiere que se dé al acusado el tiempo necesario para preparar su defensa, y es posible realizar una defensa junto con un abogado defensor.

Es necesario proporcionar las condiciones necesarias para que siempre que el imputado deba intervenir en el proceso penal de alguna manera, especialmente al realizar una declaración, le sea posible consultar con el abogado con anticipación y aceptar instrucciones. Esto puede proporcionar más comodidad para su defensa. Esto lleva a que el tiempo de preparación de la defensa debe ser prudente y debe basarse en la complejidad de los puntos a tratar (por ejemplo, si el informe contiene cientos de páginas, solo debe ir en detrimento de la garantía otorgada por un día); y Sus comunicaciones deben gozar del derecho a la privacidad.

- La garantía de contradicción se refleja finalmente en el derecho a tener la última palabra. En otras palabras, el debate debe terminar con el uso del derecho a hablar por parte del imputado o su abogado.

Esta garantía está diseñada para asegurar que el imputado pueda contestar y contradecir por completo todas las alegaciones y argumentos que se utilizan en su contra, y que el debate solo podrá concluir una vez garantizada la intervención

definitiva. Si no le corresponde al imputado dar por terminado el debate, puede suceder que el principal órgano responsable del proceso penal continúe con la parte más importante del cargo hasta que el imputado esté después del turno del imputado, porque entonces no hay respuesta. acusado.

I. El principio de contradictorio

En el derecho a obtener tutela judicial efectiva, no solo encontramos el derecho a buscar justicia a través de las instituciones judiciales, sino que también tenemos el derecho a hacer efectivos los laudos judiciales o arbitrales. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico requiere que se tomen medidas preventivas para obtener medidas preventivas. Es razonable poder garantizar el resultado final del procedimiento principal, porque Ugo Rocco insiste: "Por lo tanto, debido a la demora en el anuncio, condena y ejecución, los hechos existentes y el estado legal pueden ser modificados para constituir Bienes garantizados de los derechos reclamados o sustraer estos bienes de la realización de los derechos en acción".

Teniendo en cuenta la importancia de las medidas preventivas, porque el fin último de las medidas preventivas no es resolver controversias o aclarar incertidumbres legales, como en el caso del procedimiento principal, esto se deriva de lo establecido en el artículo 3 del "Título Provisional" y " Dos elementos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la finalidad de ésta es preservar la posibilidad de ejecutar la sentencia o sentencia dictada al final del procedimiento principal; en este sentido, existe un procedimiento especial que es razonable, que permite al juez dictar sentencia. Se utilizan registros resumidos y procedimientos a corto plazo para determinar si las medidas preventivas requeridas se otorgan con los elementos de juicio.

Por tanto, los procedimientos preventivos son una herramienta del procedimiento principal, la diferencia es que las medidas preventivas se basan en supuestos que los jueces creen que pueden ser ciertos, porque los jueces no tienen un cierto grado de juicio para evaluar los requisitos preventivos. Se reconoce plenamente que siempre que una de las características de la institución sea general, y la decisión de otorgarla se base en la autenticidad o apariencia de los derechos invocados por el demandante, el derecho podrá posteriormente declararse infundado en el cliente sin más, Esto no significa que en su momento no se hayan otorgado razonablemente tareas preventivas, pues para certeza se requiere una mayor comprensión de los temas controvertidos analizados en el proceso principal.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la tarea debe realizarse incluso a voluntad del afectado, se trata de una opción legislativa que estipula que las medidas preventivas deben ser tomadas, no escuchadas, o en el marco del principio de contradicción, es decir, en términos del ordenamiento jurídico peruano. Como explicaremos más adelante, si comparamos las normas de la Ley de Procedimiento Constitucional, la Ley de Procedimiento Civil, la Ley General de Arbitraje y el Decreto Legislativo 1071 (publicado en el diario oficial El Peruano), encontraremos dos soluciones. El 28 de junio de 2008.

¿Cuál es la contradicción? El principio de bilateral o contradictorio es que cada parte debe conocer el comportamiento procesal en el proceso para tener derecho a interferir y ejercer sus derechos. Defiéndete y demuestra tu posición. Al respecto, Alsina señaló: “De acuerdo con el principio constitucional que garantiza la defensa judicial, nuestra ley procesal establece un sistema bilateral. De acuerdo con este procedimiento, todas las acciones procesales deben ser

ejecutadas bajo la injerencia de la otra parte. Las contradicciones son muy importantes, es decir, la oposición a la ejecución. El derecho del comportamiento, y el responsable del tratamiento es el derecho a verificar su comportamiento”. En este sentido, el principio garantiza que las partes conocerán el comportamiento en el proceso para que puedan ejercer los derechos correspondientes en su contra cuando lo consideren necesario.

De acuerdo con este principio, los involucrados en el procedimiento deben comprender todo lo que sucede en el mismo para asegurar que puedan ejercer su derecho a la defensa y dejar constancia del cumplimiento del principio. Informar oportunamente a la otra parte de lo sucedido, y no es necesario que el afectado interfiera o declare la efectividad de la conducta procesal del asunto.

En resumen, es obvio que en el caso de evaluar las medidas preventivas y obtener una base de no auditoría, se viola el principio bilateral o el principio de contradicción. En el caso de la efectividad de las medidas tomadas, este principio es una medida preventiva razonable. Hacer consciente a la víctima y ser amenazada, esto puede ser porque puede dificultar su ejecución u obtener su aprobación en una emergencia.

En nuestro sistema, existen algunas reglas que se contradicen en el tiempo, es decir, antes de que el juez haga un anuncio a solicitud de una de las partes, y los afectados solo conozcan las medidas preventivas después de dictar una orden judicial. Al respecto, Monroy Palacios (Monroy Palacios) demostró que la última opción es razonable y señaló: “La situación especial del principio contradictorio en el principio de precaución no significa que no se entienda en absoluto. Contenido, pero para reformular la fórmula y ajustar la adaptabilidad de su función. Incluye la fase

de prevención en la búsqueda para asegurar la efectividad del proceso”.

J. El derecho de contradicción en el derecho comparado.

a. El Salvador.

Como principio de defensa y contradicción (en el derecho civil y en el derecho procesal mercantil), el artículo 4 lo prevé, que establece que el sujeto al que se dirige la denuncia tiene derecho a defenderse en el procedimiento, intervenir en el procedimiento y esclarecer los medios. Pruebas relacionadas. En cualquier caso, cada parte tiene derecho a tener la oportunidad de presentar sus propios argumentos y refutar la opinión contraria, y solo si la ley lo estipula claramente puede tomar una decisión sin escuchar primero las opiniones de ninguna de las partes.

b. España.

El principio de contradicción de España exige que, como requisito previo para realizar una solicitud (o exigir que el juez tenga el derecho), se requiere una audiencia de la persona que realiza la solicitud y los medios de defensa que considere adecuados.

La audiencia efectiva del partido político no puede obtener el cumplimiento de este requisito, pero también se puede observar la posibilidad de actuar en el proceso, aunque no lo utiliza.

El principio de contradicción (España) está apoyado constitucionalmente en el artículo 24 del Convenio de las Comunidades Europeas. El establecimiento de la potestad de juicio de "plena garantía" se refiere al primero de ellos, es decir, nadie puede ser condenado.

2.2.2 De la variable dependiente: En la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364.

A. Medidas de protección y medidas cautelares.

Al condenar los hechos de violencia contra la mujer y los familiares se activan una serie de mecanismos como: (i) la investigación del fiscal del delito y las posibles responsabilidades del presunto agresor; (ii) el juez es de oficio o debe sufrir Se pueden tomar medidas de protección preventiva a solicitud del solicitante.

Si bien todos estos mecanismos están estrechamente relacionados con los mismos hechos de violencia que ocurren en el seno de grupos familiares, responden a una amplia variedad de propósitos y propósitos; tantos que cuando el caso se traslada a la Fiscalía Penal, Lo que se busca es probar que las acciones punitivas del país contra el agresor son razonables, y este agravante ha producido este efecto en la familia. Si se prueba el delito y la responsabilidad penal, puede resultar en la privación de la libertad del agresor o en la absolución. Otro mecanismo que se activa es la protección preventiva para asegurar que las decisiones finales que se puedan tomar en estos reclamos sean efectivas; finalmente, promover un mecanismo de protección al lesionado para evitar que continúen las conductas nocivas.

Los reclamos relacionados con alimentación, régimen de visitación, posesión, suspensión temporal o exterminio del patriarcado se utilizará como medida preventiva la liquidación de los bienes heredados. El objetivo efectivo son los titulares de los derechos materiales protegidos por la justicia; en cuanto a las medidas de protección, estas medidas estarán diseñadas para brindar medidas de protección a quienes denuncian hechos violentos, no solo a quienes denuncian hechos violentos, sino también a Otras personas que también han sufrido tal

comportamiento en un entorno familiar. ataque. Este artículo discutirá la última hipótesis, a saber, las medidas de protección, pero creo que es necesario distinguir estas medidas de las preventivas.

El precedente cercano a estas medidas está estipulado en el artículo 677 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

“en anticipación a la implementación de la decisión final en el futuro, lo mejor es considerar los intereses de los menores afectados por la misma. Si en el proceso se produce violencia personal, presión psicológica, intimidación o persecución de cónyuges, parejas, hijos o miembros fundamentales de la familia, el juez debe tomar las medidas necesarias para detener de inmediato la conducta nociva sin comprometer las disposiciones de esta cláusula ”.

Este artículo se refiere a la protección esperada, para lo cual las medidas que se tomen deben reflejar la alta probabilidad de que existan los derechos invocados, y se espera inevitablemente el efecto de la sentencia firme. Además, también utiliza medidas de protección diferentes a las esperadas.

Si durante el proceso se produce violencia física, presión psicológica, intimidación o persecución de cónyuges, parejas, hijos o cualquier miembro básico de la familia, y no es necesario tomar medidas de precaución diferentes a las esperadas, entonces tome medidas de protección. Ante esto, los jueces deben tomar las medidas necesarias para detener inmediatamente los actos lesivos sin perjuicio del ejercicio de las facultades obligatorias del juez, como sanciones pecuniarias o detención por veinticuatro horas, para resistir a defensores irrazonables, como los artículos del Procedimiento Civil El artículo 53 establece claramente.

Si bien las medidas de protección están diseñadas para o benefician a los cónyuges, convivientes, hijos o cualquier miembro del núcleo familiar, también incluyen medidas de

contención contra la parte causante de la agresión, no necesariamente el imputado, pero también puede extenderse. Al propio solicitante. Las medidas cautelares no están estrictamente dirigidas al imputado, sino a las partes y terceros involucrados en el proceso.

Esta medida de protección también está estipulada en la "Ley Especial sobre Violencia Doméstica" y fue objeto de una reunión plenaria de la jurisdicción superior de la familia en septiembre de 2007. En la sesión plenaria antes mencionada, el tribunal dictaminó: "El juez debe tomar medidas preventivas antes o durante la violencia intrafamiliar.

Debe considerar: base fáctica y prueba adjunta que le permita evaluar la racionalidad de los derechos invocados y el riesgo de demora (Los requisitos generales sustantivos establecidos por el artículo 611 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), de acuerdo con el artículo 3 (d) de la Ley de Violencia Doméstica, decidir sobre medidas de protección o medidas preventivas puede eximir a estos requisitos formales, y estos requisitos formales en última instancia constituyen Estas medidas deben tener las mismas barreras para la tutela de emergencia que el artículo 23 de la agencia legal ".

De acuerdo con las declaraciones realizadas en la sesión plenaria antes mencionada, existe una tendencia a confundir las medidas de protección con las medidas previstas. El primero tiene una finalidad protectora y la "Ley Antiviolenencia" lo estipula claramente. La familia, así como la segunda parte del artículo 677 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la medida anticipada (el propósito a corto plazo no es proteger sino lograr la vigencia de la decisión final) intenta implementar la decisión final en el futuro con anticipación y requiere la implementación de medidas anti-preventivas. Y la casi certeza de los derechos invocados, y la

urgente necesidad de adoptar las expectativas anteriores para la efectividad de los derechos definidos.

Destacamos que el Pleno de la jurisdicción en ese momento consideró que tenía una comparecencia informal: “De acuerdo con el artículo 677 de la Constitución, los jueces que conozcan de violencia intrafamiliar pueden tomar medidas de protección en cualquier procedimiento. Dado que los legisladores estipulan ampliamente Para los asuntos familiares y los intereses de los niños y jóvenes (divorcio, patria potestad, derechos de visita, tutela, tutela, derechos de protección), la Ley de Enjuiciamiento Civil puede ordenar de inmediato las medidas apropiadas para detener los comportamientos considerados perjudiciales, y Este derecho de protección no debe tener su origen en nuevas solicitudes o nuevos procedimientos, ya que esto limitará el derecho a la tutela judicial efectiva, y los jueces no asumirán sus funciones como garantes de la corte. Derechos humanos”.

Si bien las dos medidas de prevención y protección tienen algunas cosas en común, como oportunidad, variabilidad y urgencia; independientemente de que se pruebe o no la responsabilidad penal del presunto agresor, las medidas de protección se consideran una protección preventiva para la víctima. ; Se trata de dos medidas distintas, aunque ambas se deriven de los denominados hechos violentos, porque el agresor puede ser liberado de la condena penal por falta de pruebas, pero ello no puede dar lugar a la afirmación de que no se requiere la tutela preventiva para apoyar al agresor denunciante. Para quienes presentan una denuncia, las medidas de protección juegan un papel muy importante, porque la pena puede haber sido cancelada, pero la protección judicial continuará y se mantendrá.

A través de estas medidas de protección, se puede lograr la protección contra la prevención. En rigor, el beneficiario no es el

demandante, sino la persona que presentó la denuncia, pero incluso puede ser alguien distinto de la denuncia, pero están unidos por lazos familiares o pertenecientes a un mismo grupo familiar. Es decir, son muchos los objetos indeterminados que pueden beneficiarse de este tipo de protección, cuya finalidad principal es prevenir posibles amenazas que puedan atentar contra la integridad o la vida de la persona denunciada como víctima. Violencia en el ámbito familiar.

A diferencia de la tutela esperada, su efectividad depende del resultado de la sentencia. En la tutela preventiva, mientras no se agote con éxito la materialización de las medidas tutelares beneficiosas para la persona, su permanencia será razonable. Condene la agresión o el abuso.

Evidentemente, para instruir estas medidas se utiliza como prueba relativa la prueba que el juez puede acreditar. La acusación de la persona que denunció la violencia por sí sola basta como argumento de las medidas de protección. La acusación es que, si el juez confirma que las medidas de protección promulgadas en su momento ya no son suficientes para acreditar su perdurabilidad, la violencia puede reafirmarse o levantarse posteriormente; En otras palabras, a diferencia de la tutela esperada, la mera acusación puede activar la prevención, mientras que la tutela requiere pruebas de alta intensidad, lo que requiere asumir que los derechos reclamados por el demandante son muy probables o casi seguros.

Las medidas de protección no necesariamente tienen que estar condicionadas, sino que deben estar condicionadas a la realización de resultados, independientemente del momento en que se obtengan los resultados; por otro lado, las medidas esperadas sí tienen un proceso final, es decir, definir la sentencia reclamada por el demandante; por su La constitución hizo

efectiva la declaración final, por lo que hay pruebas suficientes para demostrar que el demandante invocó este derecho.

Como característica de estas medidas anticipadas, la instrumentalidad no se extiende a las medidas de protección, porque su finalidad no es el derecho a disputar, sino los beneficios legales incidentales del debate, como la integridad general de la persona. Por tanto, hemos dicho que su escala no es el motivo de su expedición, sino la exigencia de prueba significa probar su riesgo de supervivencia, y las meras acusaciones son suficientes para lograr esta protección.

En el caso de la tutela previa, obviamente esto es inaceptable, ya que la prueba legal debe basarse en la alta probabilidad de su existencia, por lo que la prueba mostrada es fundamental para mantener casi toda la tutela. Determinar si existe el derecho al debate. Luego de presentar estas ideas de esta manera, continuaremos analizando la necesidad de implementar medidas de protección, independientemente del resultado de las actividades del Ministerio o de las decisiones judiciales expresadas en la sentencia.

B. Los mecanismos de protección de la tutela jurisdiccional efectiva.

a. Definición de medidas cautelares.

MONROY PALACIOS citando a FRANCISCO CHAMORRO “(...) refiere que se encuentran establecidos constitucionalmente e implican, básicamente, el desarrollo de las siguientes directrices: I. Acceso a la Justicia; II. Garantía del derecho de defensa; III. Derecho a obtener un pronunciamiento sobre el fondo que ponga fin al proceso y IV. El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional” (p.104).

Asimismo, dichas medidas son definidas por CALAMANDREI como “(...) una decisión anticipada y provisoria del mérito,

destinada a durar hasta el momento en que a esta regulación provisoria de la relación controvertida se sobreponga la regulación de carácter estable que se pueda conseguir a través del más lento proceso ordinario (...)” (1997, p. 58-59).

Por lo que PRIORI POSADA al señalar que la Tutela Cautelar “es una de las formas de tutela jurisdiccional que brinda un ordenamiento jurídico” (p. 31), al mismo tiempo que las define como “un instituto jurídico por medio del cual se garantiza la efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso frente a los riesgos derivados de la demora del mismo. Para ello, el órgano jurisdiccional que conoce el proceso cuya decisión se quiere garantizar (proceso principal), luego de evaluar si se presentan los presupuestos exigidos por la ley, dicta una resolución, a pedido de parte, que dispone el otorgamiento de una medida adecuada para poder garantizar la eficacia de la sentencia (medida cautelar)” (2006, p. 36)

b. Presupuestos de las medidas cautelares.

Como sistema de derecho procesal, las medidas preventivas deben cumplir con ciertos supuestos que son fundamentales para otorgar o negarse a tomar medidas preventivas, contribuyendo así a evitar la arbitrariedad de los imputados y jueces al solicitar ò otorgar respectivamente (HURTADO REYES 2009, p. 944).

c. Peligro en la demora:

PRIORI POSADA, (2015). considera la piel de m como un prerrequisito indispensable, para la liberación de cualquier medida preventiva es necesaria la existencia, de lo contrario no tiene sentido (pág. 37), el poder judicial. Asimismo, el peligro de demora se compone de dos supuestos, que deben ser evaluados en determinadas circunstancias para determinar su existencia. El primero es el riesgo de daño

legal, que debe ser causado por demoras en el proceso, y el segundo es el daño legal inminente.

En este sentido Silva Muños (2015). Nos menciona que , el riesgo de demora es el riesgo de daño legal causado por demoras procesales, principalmente porque con el tiempo, la entrega de la sentencia continúa en el proceso judicial, al igual que cuando se presenta una demanda. Pasar por varias etapas hasta la fecha de la última oración, lo que puede conducir a su desarrollo. “(...) el objeto pretendido desaparezca o que el demandado en forma maliciosa realice actos que tiendan a impedir el cumplimiento de lo que en su momento podría decidir el juzgador, esto hace que se tienda a proteger al actor con una medida cautelar que haga posible la ejecución de lo resulto en su momento (...)”

Monroy Palacios. (2002), refiere que el peligro en la demora o *periculum in mora* “(...) constituye la amenaza de que una pretensión se torne ineficaz, luego de estimarse la misma a la finalización del proceso. Esta situación de amenaza se configura sea por el transcurso del tiempo entre la petición y la sentencia que concede el derecho solicitado, o por el actuar malicioso de la parte sobre la que se reclama el derecho (...)”.

Por otro lado, el riesgo de demora como riesgo inminente de daño legal se refiere a que una situación condenada como situación peligrosa tiene cierta posibilidad de ocurrencia, es decir, no basta con preocuparse por el daño legal, sino solo eso. Eso es todo (daño legal). Esto está por suceder o está sucediendo. De esta forma, inminente debe entenderse como lo que está por suceder, lo que está por suceder o lo que está por suceder, debe ser evaluado por el juez de forma abstracta y no abstracta, teniendo en cuenta las características del reclamo solicitado en el proceso. (PRIORI posada, 2015, p. 40-41).

En este mismo sentido, CALAMANDREI refiere acerca de la inminencia del daño jurídico que “(...) no basta que el interés en obrar nazca de un estado de peligro y que la providencia invocada tenga por ello la finalidad de prevenir un daño solamente temido, sino que es preciso, además, que a causa de la eminencia del peligro la providencia solicitada tenga carácter de urgencia, en cuanto sea de prever que si la misma se demorase el daño temido se transformaría en daño efectivo (...)” (2005, p. 41).

Por otro lado, además de inminente, el peligro en la demora también debe ser real y actual, es decir, la concretización del daño legal está ocurriendo o está por ocurrir de manera actual o cercana, eliminando así el impacto sobre el mismo. Miedo futuro.

C. Verosimilitud en el derecho invocado o apariencia de fundabilidad de la pretensión principal.

“En el derecho romano este requisito se denominaba: *fumus bonis iuris*. La palabra *fumus* significa humo, es decir, se exigía que el peticionante tuviera un humo de derecho. Debe entenderse el concepto humo como una apariencia, rasgo o aspecto exterior de derecho. En otras palabras, que pareciera derecho” (MONROY GALVEZ, 2007, p. 25).

Este supuesto significa que en la valoración del juez del reclamo, el juez piensa que puede plantear una controversia al momento de analizar el reclamo, porque tiene una base jurídica protegida. (MARTEL CHANG, 2003)

Por lo que la docente VILELA CARBAJAL Señale que el nombre correcto de esta hipótesis debe ser la apariencia de la sustentabilidad del reclamo principal, porque la razonabilidad se refiere más al reclamo que a la ley misma, aunque la mayoría de las doctrinas creen que es legalmente razonable invocarlo.

Asimismo, el docente MONROY PALACIOS refiere que al tiempo que requiere el demandante para tomar medidas cautelares en el proceso judicial. Debe probarse al juez que el reclamo que se intenta garantizar será promulgado en el momento de la sentencia. Por lo tanto, no es el derecho en sí, es decir, aún no es incierto. La existencia del derecho, pero la reivindicación del derecho demandante se ve amenazada por un mal inminente (2002, p. 170).

Por otro lado, como el peligro de demora, el presupuesto está estipulado en el artículo 611 del Partido Comunista de China. Asimismo, este presupuesto no significa que el juez realice un análisis detallado con base en las proposiciones planteadas por el demandante, sino que implica el proceso de conocimiento mediante el cual el juez determina que los derechos invocados por el demandante sí existen, no solo en base al proceso de conocimiento. Por el contrario, se realiza un análisis probabilístico sobre la urgencia del peligro inminente (PRIORI POSADA, 2015, p. 73), tal como lo explica CALAMANDREI al señalar que “(...) la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal: en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable aquel que solicita la medida cautelar (...)” (2005, p. 77).

D. Adecuación.

Respecto a este supuesto, se puede decir que las medidas preventivas están estrechamente relacionadas con los reclamos que se hacen en el procedimiento, por lo que debe ser adecuado para asegurar la validez de la sentencia. (VILELA CARBAJAL, 2007, p. 278). De esta manera, la adecuación debe ser entendida “como la correlación y coherencia que debe de existir

entre lo que se pretende cautelar en el proceso principal y la tutela cautelar que se dicta, esto es, que el pedido de tutela cautelar debe adecuarse a la pretensión que se pretende garantizar” (REYES HURTADO, 2009, p. 953)

En este sentido nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que la adecuación “(...) exige que el juzgador deba adecuar la medida cautelar solicitada a aquello que se pretenda asegurar, debiendo dictar la medida que de menor modo afecte los bienes o derechos de la parte demandada (...)” (STC. Exp. N° 0023-2005-PI/TC del 27/10/2006 f.j. 52.c.)

En este sentido, nuestro TC ha señalado que el principio de proporcionalidad “(...) es un principio general del derecho expresamente positivado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución (...)” (STC. Exp. N° 0010-2000-AI/ TC del 03/01/2003 f.j. 138), asimismo precisa que el mencionado principio “(...) sirve para establecer en cada caso en concreto si una medida, una orden o una conducta se apega o no a las exigencias del valor justicia (...)”(p. 7), Por lo tanto, si es necesario para lograr la efectividad del procedimiento, el juez encargado del procedimiento debe evaluar antes de bloquear cualquier medida preventiva y considerar que la medida afectará el alcance de los derechos de la otra parte. Por lo tanto, si es desproporcionada o irrazonable, Considerando que solo las transacciones justas se ajustan a la naturaleza humana, lo que puede hacer que el valor sea justo.

E. Contracautela.

La contracautela o caución “(...) es la garantía que ofrece el solicitante de una medida cautelar con la que respalda el pago de la eventual indemnización de los daños y perjuicios al que se

pudiera ver obligado, en caso la medida cautelar obtenida haya sido ejecutada indebidamente” (PRIORI POSADA, 2015, p. 95).

Está regulado en nuestras regulaciones artísticas. El artículo 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los parámetros que debe otorgar el juez. El juez cree que puede ser calificado, modificado o sustituido convenientemente, por lo que no es necesario aceptar el parámetro medidas preventivas de acuerdo con las condiciones que determine el demandante de la medida. Asimismo, la prohibición puede tener carácter real o personal, según se describe en el art. Partido Comunista de China 613.

Por otro lado, hay que estudiar con precisión la contracautela “(...) después de la modificación del Código Procesal Civil del año 2008, ya no es un presupuesto para la concesión de las medidas cautelares, sino un presupuesto para su ejecución (...)”

Esto último fue explicado por el profesor MONROY PALACIOS, quien señaló que el contrabando es un requisito de acción o ejecución, no un requisito de origen en sí. Dado que la medida cautelar está diseñada para garantizar que el acusado pueda verse afectado cuando se tomen precauciones innecesarias en su contra, el acusado será verificado después de que se aprueben las medidas cautelares en lugar de antes de la aprobación. (2002).

Por lo que concluyo “(...) la caución obedece a una potestad del órgano jurisdiccional que deberá ser utilizada cuando los resultados de la interpretación judicial respecto del caso en concreto así lo determinen. En este sentido, es posible que existan casos donde no sea necesaria la petición de una caución, en otras donde se requiera únicamente una promesa de cubrir los posibles perjuicios (caución juratoria), o una caución pecuniariamente adecuada cuando el riesgo en la concesión de la medida sea manifiesto”.

F. Principales características de las medidas cautelares.

En cuanto a las características de las medidas preventivas, los legisladores de nuestro país han admitido claramente la existencia de prejuicios, vacilaciones, medios y variabilidad. No importa lo que digan nuestros legisladores, creemos en este trabajo que el prejuicio no será parte de las características de las medidas preventivas, porque las medidas preventivas (...) no juzgan ni prejuzgan sobre los derechos del peticionante (...) Es decir, cuando el juez hizo un breve entendimiento de la premisa de las medidas preventivas, no hizo ningún anuncio sobre el fondo de la proposición, proposición que será discutida y resuelta en el procedimiento principal. Sí, es un cálculo de probabilidad utilizado para evaluar si existen los derechos del solicitante invocados para medidas preventivas (REYES HURTADO, 2009, p. 943).

G. Instrumentalidad.

Esta característica se refiere al hecho de que toda medida preventiva se apoya u obedece al procedimiento principal, lo que garantiza la validez de la sentencia y, por lo tanto, brinda una protección judicial efectiva. (PRIORI POSADA, 2015, p. 102).

Dicha Instrumentalidad "(...) no supone que el proceso cautelar constituya un fin en sí mismo, sino que sirve para asegurar los derechos que deberá definirse en el proceso principal (...)” (PELAEZ BARDALES, 2008, p. 19) En ese sentido, CALAMANDREI señala que en "(...) las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo, al cuadrado; son, en efecto, de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mayor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es un medio para la actuación del derecho, estos son, en relación con la finalidad última de función jurisdiccional, instrumentos del instrumento”(p. 45).

Asimismo, el docente HURTADO REYES también mencionó que, una vez obtenida una sentencia favorable, los métodos anteriores obligan a extinguirlas (medidas preventivas), es decir, una vez que el tribunal emita sentencia firme, ésta desaparecerá y dará paso a las medidas de ejecución. Asimismo, señaló que instrumentalidad es la duración de las medidas preventivas, cuyo efecto legal depende de lo que se decida en el procedimiento principal y desaparece al finalizar el procedimiento principal. Finalmente, señaló que debe existir una relación entre el posible contenido de la sentencia y las medidas preventivas, es decir, un ajuste entre las medidas preventivas y los procedimientos principales. (REYES HURTADO, 2009, p. 914).

Por otro lado, el efecto de la medida preventiva sobre el procedimiento principal se producirá, por ejemplo, cuando la medida se emita antes del inicio de la medida, por lo que su vigencia y efectividad estará sujeta al reclamo que se realice dentro del plazo para el reclamo. El ordenamiento jurídico estará regulado por el art en nuestro caso. Artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo, otra situación en la que se puede entender el medio de esta medida preventiva es que la medida preventiva se declare infundada en un inicio, es decir, cuando se le imponga jurisdicción, en este sentido, aunque la medida haya, sin embargo, si el juez requiere que revise después de dictar una orden judicial real o garantías conjuntas y múltiples, puede mantener su efectividad hasta que obtenga un mayor nivel de revisión.

H. Provisionalidad.

Las medidas preventivas temporales pueden ser modificadas, sustituidas o suspendidas, siempre que cambien las condiciones para su concesión. (PELÁEZ BARDALES, 2010, p. 10).

Asimismo, la medida cautelar “(...) mantendrá su vigencia hasta que no se dicte la sentencia con autoridad de cosa juzgada, u otra resolución que disponga su levantamiento o se produzca una circunstancia que, según la ley, la deje sin efecto. De esta manera las medidas cautelares tienen una vida limitada en el tiempo, es decir, no tienen una vocación de permanencia; pero esa vida limitada en el tiempo está condicionada a que se produzca un hecho futuro, y esto es, como hemos señalado el dictado de la sentencia con autoridad de cosa juzgada o de otra resolución que la levante” (PRIORI POSADA, 2015, p. 105).

Por otra parte, Calamandrei, (2005) señala que “(...) la provisionalidad de las providencias cautelares sería, pues, un aspecto y una consecuencia de una relación que tiene lugar entre los efectos de la providencia antecedente (cautelar) y los de la providencia subsiguiente (definitiva), el inicio de los cuales señalaría la cesación de los efectos de la primera.”

Igualmente, en el caso de sentencia firme, se tomará la vida provisional o limitada en el momento de las medidas preventivas, por ejemplo, si se toman medidas preventivas de secuestro durante el pago del monto para asegurar la ejecución futura, si el imputado incumple voluntariamente con la obligación, entonces Una vez impuesta la sentencia al deudor para imponer la obligación de cumplir con la obligación, se tomarán las medidas cautelares para recurrir a medidas de ejecución para buscar la ejecución de la sentencia que siempre se ejecuta y cuando sea resuelta y con calidad de sentencia firme.

I. Variabilidad.

Esta característica es muy cercana a la temporal, pero hay diferentes matices, es decir, la temporal está restringida por el proceso principal y es una característica normal de todas las medidas preventivas, mientras que la variabilidad está más relacionada con el contenido de las medidas preventivas, y

puede estar en cualquier A solicitud de los interesados, el juez podrá modificarlo o revocarlo. Por tanto, aunque la variabilidad es la base de todas las medidas preventivas, no es eficaz en todas las situaciones. (MONROY PALACIOS, 2002, p. 162).

J. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN REGULADAS EN LA LEY N° 30364.

Por lo que la medida de protección de sacar al agresor de la casa “(...) destinada a establecer la no permanencia del agresor en el mismo inmueble en el que vive con la víctima, a fin de evitar la sobre victimización de esta” (MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE LA NACIÓN, p. 73). El motivo de esta medida es que en los conflictos de convivencia familiar las diferencias insuperables entre los núcleos familiares pueden conducir a situaciones insuperables, que en algunos casos pueden derivar en agresiones físicas y psicológicas. Adopte medidas de protección estrictas, porque otras medidas de protección no pueden aliviar la violencia en las casas mencionadas.

El juez debe evaluar esta medida de sacar al agresor del hogar en circunstancias específicas e indicar claramente un período de tiempo razonable con base en el estándar de razonabilidad y proporcionalidad.

Por otro lado, dentro de la distancia que determine la autoridad judicial, las medidas de protección a la víctima o acercamiento a la víctima en cualquier forma son similares a las medidas de protección para prevenir el acoso a las víctimas según lo estipulado en la anterior ley 26260, y el propósito es ordenar Una persona deja de perseguir o acechar a otros sin respirar o descansar, lo que les permite realizar las actividades diarias normales. Cabe señalar que el art. El artículo 22, párrafo 3 de la Ley No. 30364 se refiere a la prohibición de comunicarse con las víctimas a través de cartas, teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales, redes institucionales, Internet u otras redes o

métodos de comunicación. Creemos que las disposiciones anteriores son innecesarias, porque el comportamiento que obstaculiza a la víctima de acoso cubrirá el comportamiento descrito en los incisos 2 y 3 de la Ley 30364.

Asimismo, la medida de protección de inventario de bienes es “ (...) una medida excepcional y accesorio de otra, despachándose siempre que se asuma convicción o exista verosimilitud de que los bienes a inventar pertenecen a la familia o siendo de propiedad exclusiva del agresor, estos han sido aportados para fundar una comunidad de bienes y disfrutar de ellos de manera permanente, que además éstos bienes sean imprescindibles para la subsistencia de la familia; y que debido al desquicio matrimonial o la crisis familiar, la víctima tuvo que haberse visto forzado a retirarse del lugar donde se encuentra la vivienda y en ella todos sus bienes, y en dicha circunstancia exista el peligro de que el agresor pueda hacer uso disposición indebida, desproporcionada o abusiva de los bienes, en desmedro de los miembros más débiles” (RAMOS RIOS, 2008, p. 181).

H. Semejanzas y diferencias con las medidas cautelares.

En la actual Ley No. 30364, podemos ver que las medidas de protección y las preventivas se formulan por separado, como se puede apreciar en el art. El artículo 16 establece que luego de la interposición de una denuncia por violencia intrafamiliar, el Juzgado de Familia continuará evaluando el caso y resolviendo las disposiciones para dictar las medidas de protección y las medidas preventivas que requiera la víctima en audiencia oral. Artículo 16 de la Ley N ° 30364).

En este sentido, podríamos preguntarnos, ¿la Ley 30364 y sus medidas de protección prevén medidas de protección? La respuesta a esta pregunta se dará a continuación.

Si consideramos que las medidas preventivas forman parte del procedimiento de emergencia, su finalidad es asegurar el dictamen final, mostrando así su instrumentalidad, es decir, las medidas preventivas son el principal proceso para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Finalmente se decidió que este tipo de medidas de protección no sucederían, porque la emisión de las medidas de protección no es para asegurar el cumplimiento definitivo de la sentencia, sino para asegurar que "(...) la víctima física, psicológica, Integridad moral y sexual de la propiedad "...", lo que significa que las medidas de protección a veces pueden prevenirse, y en otros casos pueden evitar la aparición o repetición de un ciclo de violencia y evitar o reducir el impacto de los ataques. (RAMOS RIOS, 2008, p. 132).

Las medidas de protección y las medidas preventivas tienen las características de temporalidad y variabilidad, porque las medidas preventivas y las medidas de protección tienen una duración limitada, es decir, no son duraderas, pero están sujetas a agresión sexual. Los hechos futuros, como una sentencia de calidad garantizada o un caso en el que la sentencia sea invalidada por medidas preventivas, y las medidas de protección dependerán de la sentencia de la sentencia, que finaliza el proceso penal de hecho descrito anteriormente, si constituye El comportamiento anterior se puede modificar o confirmar si constituye el comportamiento anterior. Artículo 20 de la Ley N ° 30364, la misma disposición, la edad provisional también se puede observar en las disposiciones de la Ley N ° 30364, Asimismo, el carácter temporal también se puede observar en el estado de la técnica.

Al referirse al artículo 23 de la citada ley, se menciona que las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Familia seguirán vigentes hasta tanto las disposiciones del Juzgado de lo Penal o la negativa del fiscal a resolver el asunto y la declaración de no iniciar proceso penal.

Asimismo, existe variabilidad en las medidas cautelares, en cierto sentido, mientras las circunstancias que motivan la emisión de las partes sean cambiadas o inadecuadas, el juzgado de familia puede modificarlas a solicitud de las partes o de oficio. Teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar suele ser cíclica, con el fin de garantizar la seguridad o el bienestar de la víctima, en algunos casos, las medidas de protección inicial pueden complementarse con otra medida para reducir esta violencia.

Si seguimos los supuestos generales de dar medidas preventivas, es decir, la razonabilidad de los derechos invocados, la adecuación de los derechos, el peligro de demora y la actitud cautelosa contraria (ejecución del presupuesto), nos daremos cuenta que la nueva Ley 30364 y su reglamento No se menciona dar las mismas precauciones, que no aparecían en la anterior Ley No. 26260. El artículo 11 del Reglamento menciona que la Fiscalía Provincial de Familia puede exigir medidas de protección inmediatas cuando la demora genere peligro, pero también es necesario preguntarse si estas medidas de protección tienen un supuesto común de una o más medidas preventivas.

Creemos que, como señaló el profesor RAMOSRÍOS, creemos que sí comparte el peligroso presupuesto de las demoras con las medidas preventivas. En este sentido, el presupuesto en sí no se refiere a la demora o lentitud del proceso, sino que se refiere a la violencia desatada por el posible agresor. El hecho ha provocado que la víctima sufra un mal mayor e inminente. Este es un orden urgente. Por lo tanto, este no es un peligro de daño universal, sino un daño futuro inminente o inminente. (2008, p. 143-144).

De igual forma, creemos que no comparte presupuesto suficiente con medidas preventivas, porque si bien se requieren

medidas de protección para asegurar la salud física y mental de las víctimas de violencia intrafamiliar, estas no aseguran el fallo definitivo. Medidas preventivas, que deben adaptarse a las medidas preventivas en el proceso principal. De igual forma, para la implementación de las medidas cautelares, debido a la existencia de un mecanismo procesal, no es necesario el requerimiento de medidas cautelares que sustenten la indemnización de los daños ocasionados por órdenes arbitrarias.

Las personas afectadas pueden reconstruir sus derechos. Finalmente, para dictar medidas de protección, el juez de familia valorará si la solicitud del imputado (víctima) es legalmente aceptable, no por simple racionalidad sino haciéndole consciente de la posibilidad de la medida. La protección requerida es urgente, por lo que debe realizar actividades de prueba mínimas.

Finalmente, otra diferencia entre las medidas de protección y las medidas preventivas, especialmente para futuras ejecuciones, como embargos, secuestros y reclamos de diferentes formas, es asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva. Por tanto, “(...) no vemos cómo estas medidas preventivas afectan siempre al patrimonio del presunto deudor y obviamente tienen protección hereditaria, ¿cómo proteger a la persona o mantener la seguridad de la víctima? O su familia, que significa “al emitir Medidas de protección para asegurar la integridad física, psicológica y moral de la persona (...) (RAMOS RIOS, 2008, p. 186).

Asimismo, las medidas de protección y las medidas preventivas innovadoras y las medidas no innovadoras se diferencian por el carácter excepcional de estas últimas, siempre que no existan otras medidas aplicables y las medidas de protección no tengan carácter excepcional, pueden existir diferencias. En el proceso

común de violencia doméstica también tiene un carácter especial. Esta medida innovadora solo puede cambiar, no innovar. También puede ser una excepción al estipular que su efectividad causará más daño a las personas afectadas de lo que originalmente se evitó. Gran efectividad, si bien los jueces de familia pueden modificar las medidas de protección hasta que el juzgado penal o abogado de paz tenga conocimiento del caso, esto se debe a la periodicidad de la violencia intrafamiliar, por lo que se pueden tomar medidas preventivas preliminares que se complementen.

Con todo, creemos que las medidas de protección tienen algunas características típicas de las medidas preventivas, pero al mismo tiempo existen diferencias significativas entre ellas, lo que nos lleva a concluir que no son medidas preventivas por naturaleza.

I. Semejanzas y diferencias con las medidas anticipadas.

Otra semejanza es que las dos aseguran la bilateralidad, es decir, ponen en conocimiento a la otra parte el dictado de la misma con la finalidad de que ejerzan su derecho de defensa. En el caso de las medidas de protección lo podemos observar en el art. 35° del Reglamento de la Ley N° 30364 donde se deja abierta esta posibilidad al Juez de Familia quien antes de dictar las medidas de protección, puede considerar entrevistar a la parte denunciada.

Las medidas de protección y las medidas anticipatorias son de urgencia, es decir, brindar medidas de protección en el marco donde el factor tiempo juega un papel importante en la salvaguarda de los derechos del imputado, porque la orden de las medidas de protección no puede posponerse y puede conducir a la pérdida de derechos. Si no se adoptan a tiempo, se volverán irreparables. Asimismo, considerando el carácter urgente de estas dos medidas, su ejecución es inmediata en

cuanto a las medidas de protección implementadas por la Policía Nacional del Perú.

De manera más clara, podemos ver la cuestión bilateral cuando se promulgó una medida de protección para reubicar la casa del agresor, que se considera una medida severa porque una persona se ve privada de la residencia permanente. Para cometer un acto violento que perjudique a su familia se debe entablar una eventual demanda contra el agresor para que pueda ejercer su derecho de defensa. (RAMOS RIOS, 2008, p. 171-172).

En este sentido, cabe mencionar que existen algunas medidas de protección, como la evacuación del agresor del domicilio, que son similares a las medidas esperadas en la mayoría de sus características y presupuestos, y ambas tienen características drásticas. Es decir, requiere que el tribunal evalúe la existencia de los derechos invocados a través de la mediación, y también debe considerar la irreparabilidad del daño causado por la no utilización del daño. En el caso de tomar medidas de protección para sacar al agresor del domicilio, el Pleno de Justicia de Familia de 1999 sostuvo que para dar a conocer las medidas del agresor es necesario probar la existencia de violencia física o psicológica grave en la familia y obtener el reconocimiento. Pasar los exámenes físicos y / o psicológicos pertinentes es suficiente para causar daño a la víctima.

Entre estas diferencias, tenemos la variabilidad y transitoriedad de las medidas cautelares, que no aparecieron en las medidas esperadas, porque "(...) Una vez dictada la sentencia esperada, debe ser retenida antes de la sentencia definitiva Baja." (VILELA CARBAJAL, 2014, p. 272), De igual forma, una vez que la medida es requerida en su totalidad o en parte, no debe ser reemplazada por otra medida diferente a la medida requerida (2014, p. 272), es decir, si se rechaza la medida esperada, la

solicitud no se podrá volver a realizar en el futuro., Habrá otra situación. Se materializa en medidas cautelares, siempre y cuando estas medidas sean inicialmente rechazadas, mientras cambien las circunstancias rechazadas, estas medidas no impedirán que se vuelvan a aplicar en el futuro.

Otra diferencia entre estas dos medidas es el carácter especial de las medidas esperadas, las cuales serán determinadas por mediación con alta probabilidad de invocar el derecho a evitar daños irreparables o reparaciones difíciles. Esta situación no aparecerá en toda protección entre las medidas, porque la expedición del documento es la adecuada de acuerdo a las distintas manifestaciones de violencia intrafamiliar, el juez de familia tiene un alcance incierto de medidas de protección y puede ser despachado según su poder a solicitud de las partes.

De igual forma, es diferente a los requisitos para implementar medidas preventivas y medidas esperadas, es decir, para medidas esperadas, se tomarán medidas preventivas en algunos casos y no se podrá implementar la implementación de medidas de protección. En resumen, las medidas de protección son iguales a las medidas esperadas y tienen ciertas características, mientras que otras son diferentes, la diferencia entre una y otra es determinar que las medidas de protección no tienen la naturaleza de las medidas esperadas.

J. Semejanzas y diferencias con las medidas genéricas.

Si bien el ordenamiento jurídico no prevé medidas de protección y medidas generales, se pueden asignar medidas de protección, es decir, los jueces pueden tomar medidas de protección según su criterio, lo cual no es arbitrario, sino una discreción técnica otorgada por el ordenamiento jurídico. Para poder tomar las medidas más adecuadas para la reclamación, es legal.

En el caso de medidas generales, podemos observar técnicamente este juicio técnico. El artículo 629 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los jueces tienen facultades preventivas generales y pueden dictar medidas preventivas no previstas por el ordenamiento jurídico, en las medidas preventivas esta discreción técnica puede observarse técnicamente. El artículo 22 de la Ley N ° 30364 establece que se pueden dictar otras medidas para garantizar la seguridad y la vida de las víctimas.

La diferencia radica en el carácter preventivo de las medidas generales, las cuales tienen características residuales, es decir, se dictan cuando las medidas preventivas están obligadas a otorgarse en el ordenamiento jurídico, mientras que las medidas cautelares no. Tiene carácter preventivo y no tiene características remanentes, es decir, las medidas de protección atípicas no se emiten cuando no existe el requisito de otorgar medidas de protección específicas, sino que se emiten en circunstancias específicas que otras medidas de protección no pueden cumplir. integridad de la persona.

K.Semejanzas y diferencias con las medidas autosatisfactivas.

Las medidas de protección y las de autosatisfacción son de carácter urgente, es decir, solo se pueden tomar "cuando el tribunal necesita responder y resolver con rapidez". (PEYRANO, 2000, p. 11) La violencia doméstica es una serie de situaciones dañinas, y el tribunal debe responder rápidamente para proteger la salud física y mental de los miembros de la familia. Asimismo, estas dos medidas son inmediatamente ejecutables después de que el tribunal competente emita una orden.

Entre estas diferencias, la autonomía de las medidas de autosatisfacción es muy destacada. Una vez despachadas, puede hacer que las personas estén finalmente satisfechas con la situación en cuestión, y al ser autónomas, las medidas de

autosatisfacción no dependen de otros procesos para mantener su efectividad., agotándose en sí mismas (DE LOS SANTOS, 2002, p. 74). Esta situación no apareció en las medidas de protección, dependiendo de la vigencia de la sentencia y de si la sentencia puso fin al procedimiento por delitos que constituyeron violencia contra la mujer y familiares.

Otra diferencia entre las dos medidas es el carácter temporal de las medidas cautelares, que no se da en las medidas de complacencia, porque una vez tomadas las medidas de complacencia, no pueden ser reemplazadas por otra medida. Esto se debe a que Su particularidad y particularidad. No se permite que el caso extremo de esta medida se dé a conocer de forma ordinaria sin antes analizar rigurosamente su presupuesto (DE LOS SANTOS, 1999, p. 75).

L. Naturaleza jurídica de las medidas de protección.

Por lo que las medidas cautelares "(...) no necesariamente garantizan el cumplimiento efectivo de las sentencias finales del proceso judicial final, ni adelantan necesariamente sentencias de mérito, y no pueden terminar con su buena diligencia; por el contrario, básicamente protegen a las personas Las decisiones de derechos humanos, de esta manera abren la puerta al bienestar personal (RAMOS RIOS, 2008, p. 134)", de las víctimas de violencia familiar.

Por tanto, creemos que las medidas de protección tienen ciertas características del proceso de emergencia, ya sean medidas preventivas, anticipatorias o de autosatisfacción, pero no necesariamente tienen la misma naturaleza jurídica, sino que son la forma general de tutela de las personas. Víctimas de violencia doméstica, protegen los derechos humanos por separado.

2.1. Definiciones Conceptuales.

- **Agresión en contra de los integrantes de grupo familiar.** - El comportamiento violento contra cualquier miembro del grupo familiar se refiere a cualquier comportamiento o comportamiento que haga que otro miembro de la familia muera, dañe o sufra dolor físico, sexual o psicológico, y dicho comportamiento o comportamiento está en el contexto de responsabilidad, confianza o relaciones de poder sucedieron bajo. Se presta especial atención a las niñas, los niños, los adolescentes, los ancianos y los discapacitados.
- **Audiencia.** – Constituye una etapa del procedimiento sumario, que se caracteriza por tener en cuenta el menor tiempo límite, la menor conducta procesal y la concentración de conductas procesales en una audiencia. En los casos de violencia intrafamiliar, la audiencia se denomina medida de protección. Dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la denuncia.
- **Medidas de protección.** – Son realizadas por las diversas entidades públicas para proteger a la víctima de su agresor.
- **Ley No. 30964.** – es una ley que lo realizo el Estado a favor de las mujeres que servirá como precaución de cualquier tipo de maltrato asimismo es dado para los miembros de una familia
- **Violencia Familiar.** – Es la acción negativa que realiza un miembro familiar usando violencia psicológica o física a un integrante de su familia.

2.4. Sistemas de Hipótesis

❖ Hipótesis General

Hi: El derecho de contradicción de la persona denunciada, no incide significativamente en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo

máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.

❖ **Hipótesis Específicas**

- **H1:** El nivel de incidencia logrado del derecho de contradicción de la persona denunciada, es bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.
- **H0:** En el 2018 el nivel de frecuencia de aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada, es bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco.

2.5 Sistema de Variables

2.5.1 Variable Independiente.

El derecho de contradicción de la persona denunciada.

Dimensiones

- Notificación de la persona denunciada.
- Absolución de los cargos que aparecen de la denuncia de violencia familiar.

2.5.2 Variable Dependiente

En la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364.

Dimensiones

- Denuncia sobre violencia familiar.
- Resolución que admite a trámite la denuncia sobre actos de violencia familiar.

2.6 Operacionalización de variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE El derecho de contradicción de la persona denunciada.	<ul style="list-style-type: none"> - Notificación de la persona denunciada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se remite cédulas a la jefa de la Central de Notificaciones. - Se autoriza al Técnico Judicial realice notificaciones vía telefónica.
	<ul style="list-style-type: none"> - Absolución de los cargos que aparecen de la denuncia de violencia familiar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Absolución del denunciado de los cargos por violencia psicológica. - Absolución del denunciado de los cargos por violencia física y/o otros.
VARIABLE DEPENDIENTE En la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364.	<ul style="list-style-type: none"> - Denuncia sobre violencia familiar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presentado por el comisario de la comisaría. - Presentado por la parte agraviada ante mesa de partes del Órgano Jurisdiccional competente.
	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución que admite a trámite la denuncia sobre actos de violencia familiar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se señala fecha y hora para la audiencia especial de medidas de protección. - Se oficia al Instituto de Medicina Legal a fin remita pericia psicológica.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de Investigación

La presente investigación es de tipo aplicada, ya que tuvo como base la descripción en el tiempo pues esta investigación se realizará para poder resolver muchas interrogantes y de esta manera cambiar la realidad en la cual se encuentra el problema planteado

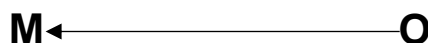
3.1.1 Enfoque

El trabajo de investigación es cuantitativo ya que está enfocada en el ámbito jurídico social, por lo que refiere a una problemática social, en los temas en que al parecer se estaría vulnerando el derecho de contradicción de la persona denunciada al no disponer correr traslado de los cargos que se le atribuye a fin haga valer su derecho a la defensa en la audiencia a programarse.

3.1.2 Alcance o Nivel

La investigación tiene el alcance o nivel de descriptiva – explicativa.

3.1.3 Diseño



Dónde:

M = Es la muestra

O = Es la Observación

3.2 Población y Muestra

Población: La población en estudio ha comprendido 60 expedientes de procesos sobre Actos de Violencia Familiar tramitados en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar.

Muestra. La muestra se determinó de manera aleatoria 06 expedientes de procesos sobre Actos de Violencia Familiar tramitados en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial de Huánuco, 2018.

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas de recolección de datos:

- Análisis documental
- Fichaje

Instrumentos de recolección de datos:

- Matriz de análisis
- Fichas de resumen bibliográficas.

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Medición

Validez. Son válidas porque se ha medido la información de los expedientes de procesos sobre Actos de Violencia Familiar, sobre Actos de Violencia Familiar, en la que el juez en la resolución que admite a trámite la denuncia por actos de violencia familiar, no dispone se corra traslado al denunciado de los cargos que se le atribuye, por lo que es eficaz para conocer el comportamiento del trabajo que estudiamos.

Confiabilidad. La presente será confiable ya que hay una conexión exacta de los resultados y si lo aplicaríamos nuevamente los resultados serían iguales o parecidos.

3.4 Técnicas para el Procesamiento de Análisis de la Información

Se analizó minuciosamente los contenidos de los expedientes de procesos sobre Actos de Violencia Familiar tramitados en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar, en la que el juez en la resolución que admite a trámite la denuncia por actos de violencia familiar, no dispone se corra traslado al denunciado de los cargos que se le atribuye, mencionados con las características ya mencionados.

Programas estadísticos

Se empleó la estadística descriptiva en la investigación, insertando las herramientas de la estadística descriptiva a fenómenos jurídicos trascendentes de la realidad social.

Análisis descriptivo

Las tablas y gráficos ayudan a observar el comportamiento de la muestra de investigación y resumen los resultados recolectados en la muestra en una matriz de análisis.

Estadística inferencial

Se aplicaron las herramientas de la estadística inferencial a fenómenos jurídicos trascendentes de la realidad social, a casos concretos consistentes en 06 expedientes.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Relato y descripción de la realidad observada

Luego de analizar las herramientas de recolección de datos descritas en el proyecto de investigación, se realizó un análisis de aplicación correspondiente porque los resultados informativos obtenidos indican las conclusiones extraídas en la investigación.

El propósito de la investigación científica actual contenida en el informe de tesis no es solo resolver el problema dentro del marco teórico, sino también resolver el problema de manera fáctica, y al mismo tiempo, considerar las cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, que señala que el Juzgado de Familia puede realizar audiencia con la sola presencia de las víctimas o sin ellas.

Sin hacer referencia a la parte denunciada, limitándose solo con indicar si considera necesaria entrevista a la persona denunciada, no garantiza el derecho de contradicción de la persona denunciada, poniendo a su conocimiento los cargos que se le atribuyen, para que en la audiencia se actúen los medios probatorios que ofrezca su defensa, ya que el Reglamento de la Ley 30364 no prevé en la notificación de la persona denunciada el traslado de la denuncia para una efectiva defensa, en la resolución que admite a trámite la denuncia interpuesta por la denunciante sobre actos de violencia familiar, limitándose con remitir cédulas de notificación a la Jefa de la Central de Notificaciones de la Corte Superior para que en el día y bajo responsabilidad cumpla con notificar a los sujetos procesales; así mismo explorar y brindar alternativas de solución que hagan posible su atención.

4.2. Procesamiento de Datos

Los resultados obtenidos del análisis realizado a seis expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar, en la que el juez en la resolución que admite a trámite la denuncia por actos de violencia familiar, no dispone se corra traslado al denunciado de los cargos que se le atribuye, a fin haga vale sus derechos de contradicción en la audiencia, lo que evidentemente vulnera el derecho de contradicción del denunciado, y por ende el debido proceso.

Cuadro N° 1

Muestra de los expedientes analizados sobre violencia familiar.

VARIABLE DEPENDIENTE				
EXPEDIENTES	SE REMITE CÉDULAS A LA JEFA DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES	SE AUTORIZA AL TÉCNICO JUDICIAL REALICE NOTIFICACIONES VÍA TELEFÓNICA	ABSOLUCIÓN DEL DENUNCIADO DE LOS CARGOS POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA	ABSOLUCIÓN DEL DENUNCIADO DE LOS CARGOS POR VIOLENCIA FÍSICA Y/O OTROS
EXPEDIENTE N° 01035-2018-0-1201-JR-FT-01	NO	NO	NO	NO
EXPEDIENTE N° 01153-2018-0-1201-JR-FT-01	NO	NO	NO	NO
EXPEDIENTE N° 01198-2018-0-1201-JR-FT-01	NO	NO	NO	NO
EXPEDIENTE N° 01305-2018-0-1201-JR-FT-01	NO	NO	NO	NO
EXPEDIENTE N° 01363-2018-0-1201-JR-FT-01	NO	NO	NO	NO
EXPEDIENTE N° 01280-2018-0-1201-JR-FT-01	NO	NO	NO	NO

Fuente: Matriz de Análisis de expedientes sobre violencia familiar.

Elaborado: Tesista.

Análisis e interpretación.

Se advierte que no dispone traslado al denunciado de los cargos que se le atribuye, a fin haga valer sus derechos de contradicción en la audiencia; con relación a la variable independiente: El derecho de contradicción de la persona denunciada, en la que se ha tenido en cuenta como una de sus dimensiones: Notificación de la persona denunciada; y como sus indicadores: Se remite cédulas a la Jefa de la Central de Notificaciones, y Se autoriza al Técnico Judicial realice notificaciones vía telefónica. Asimismo, como otra de sus dimensiones es: Absolución de los cargos que aparecen de la denuncia de violencia familiar; y como sus indicadores: Absolución del denunciado de los cargos por violencia psicológica, y Absolución del denunciado de los cargos por violencia física y otros.

De los cuales se infiere que el derecho de contradicción de la persona denunciada, no incide significativamente en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, ya que el derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Órgano Jurisdiccional antes citado, en el periodo del año 2018, restándole importancia a las formalidades previstas en la ley para la notificación del denunciado con la resolución que admite a trámite la denuncia interpuesta sobre actos de violencia familiar, limitándose con remitir cédulas de notificación a la Jefa de la Central de Notificaciones de la Corte Superior para que en el día y bajo responsabilidad cumpla con notificar a los sujetos procesales, evidenciándose una clara vulneración del derecho de la persona denunciadas.

Cuadro N° 2

Muestra de análisis a los expedientes sobre violencia familiar acerca de la variable dependiente.

VARIABLE DEPENDIENTE				
EXPEDIENTES	PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMISARÍA	PRESENTADO POR LA PARTE AGRAVIADA ANTE MESA DE PARTES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE	SE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA ESPECIAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS 72 HORAS DE INTERPUESTA LA DENUNCIA	SE OFICIA AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL A FIN REMITA PERICIA PSICOLÓGICA
EXPEDIENTE N° 01035-2018-0-1201-JR-FT-01	SI	SI	SI	SI
EXPEDIENTE N° 01153-2018-0-1201-JR-FT-01	SI	SI	SI	SI
EXPEDIENTE N° 01198-2018-0-1201-JR-FT-01	SI	SI	SI	SI
EXPEDIENTE N° 01305-2018-0-1201-JR-FT-01	SI	SI	SI	SI
EXPEDIENTE N° 01363-2018-0-1201-JR-FT-01	SI	SI	SI	SI
EXPEDIENTE N° 01280-2018-0-1201-JR-FT-01	SI	SI	SI	SI

Fuente: Matriz de Análisis de expedientes sobre violencia familiar.

Elaborado: Tesista

Análisis e interpretación.

En el segundo cuadro se tiene de los expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar, en la que el juez en la resolución que admite a trámite la denuncia por actos de violencia familiar, no dispone se corra traslado al denunciado de los cargos que se le atribuye, a fin haga valer sus derechos de contradicción en la audiencia expedientes sobre nulidad de acto jurídico tramitados en el Juzgado; con relación a la variable dependiente: En la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, considerando la dimensión: Denuncia sobre violencia familiar, se tiene como sus indicadores: Presentado por el comisario de la comisaría, y Presentado por la parte agraviada ante mesa de partes del Órgano Jurisdiccional competente.

Asimismo, la otra dimensión: Resolución que admite a trámite la denuncia sobre actos de violencia familiar, y como sus indicadores: Se señala fecha y hora para la audiencia especial de medidas de protección en las 72 horas de interpuesta la denuncia, y Se oficia al Instituto de Medicina Legal a fin remita pericia psicológica. Se concluye la ineficacia del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Órgano Jurisdiccional antes citado, restándole importancia a las formalidades previstas en la ley para la notificación del denunciado con la resolución que admite a trámite la denuncia interpuesta sobre actos de violencia familiar, limitándose con remitir cédulas de notificación a la Jefa de la Central de Notificaciones de la Corte Superior para que en el día y bajo responsabilidad cumpla con notificar a los sujetos procesales, evidenciándose una clara vulneración del derecho de la persona denunciada.

Cuadro N°3

Muestra acerca de la notificación al denunciado por violencia familiar.

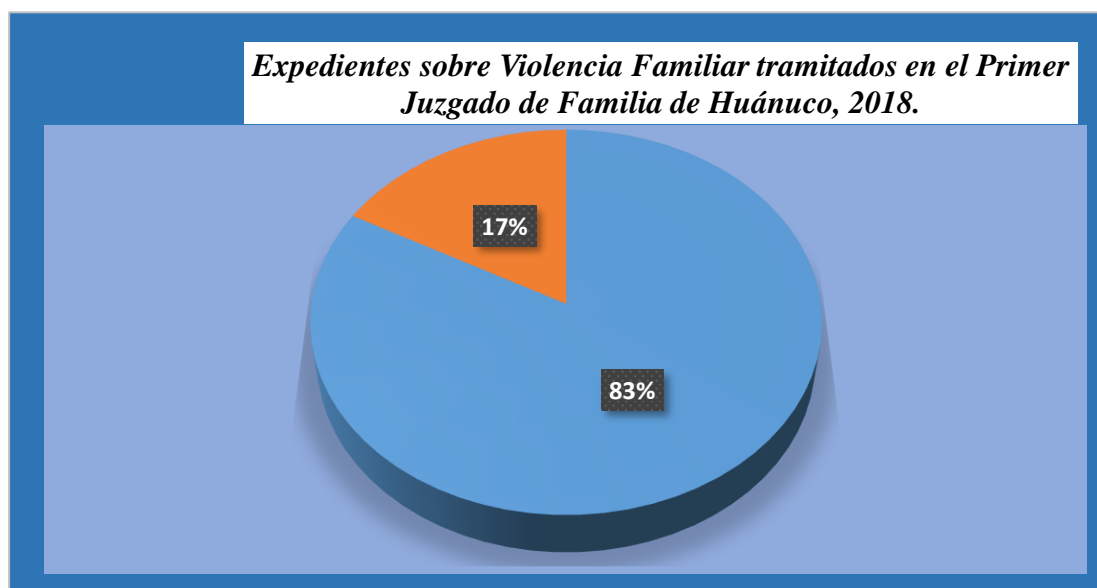
Expedientes sobre Violencia Familiar tramitado en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.	Fi	%
La denuncia por violencia familiar no se notificó al denunciado a fin de que haga valer su derecho de contradicción absolviendo los cargos que se desprenden de la denuncia.	05	83 %
La denuncia por violencia familiar se notificó al denunciado a fin de que haga valer su derecho de contradicción absolviendo los cargos que se desprenden de la denuncia.	01	17 %
TOTAL	06	100 %

Fuente: Matriz de Análisis de expedientes sobre violencia familiar.

Elaborado: Tesista

Gráfico N° 1

Muestra acerca de la notificación al denunciado por violencia familiar.



Fuente: Matriz de Análisis de expedientes sobre Violencia Familiar.

Elaborado: Tesista

Análisis e Interpretación

Habiendo hecho un análisis a la muestra de la investigación, que consta de 06 expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar; se advierte de lo aplicado el 83 % de los expedientes que la denuncia por violencia familiar no se notificó al denunciado a fin de que haga valer su derecho de contradicción absolviendo los cargos que se desprenden de la denuncia.

Ahora bien, el 17% de los de los expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar, que la denuncia por violencia familiar se notificó al denunciado a fin de que haga valer su derecho de contradicción absolviendo los cargos que se desprenden de la denuncia.

Conclusión.

Como resultado podemos afirmar que, de los expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar; se evidencia un mayor volumen de porcentaje, expedientes que la denuncia por violencia familiar no se notificó al denunciado a fin de que haga valer su derecho de contradicción absolviendo los cargos que se desprenden de la denuncia, por lo que se pudo apreciar que existe una vulneración fuerte al derecho de la persona denunciada asimismo en el artículo 16 de la ley de prevención, sanción y eliminación refiere que se deberá analizar y evaluar el caso en un plazo máximo de sesenta y dos horas por lo que en la audiencia oral se decide las medidas de protección necesaria.

Por lo que de ello se colige que lo verdaderamente trascendental es que el justiciable tiene derecho a que se dicte una resolución en derecho, siempre que se cumpla con los requisitos procesales para ello.

Cuadro N° 4

Muestra acerca de la asistencia del denunciado en la audiencia de medidas de protección.

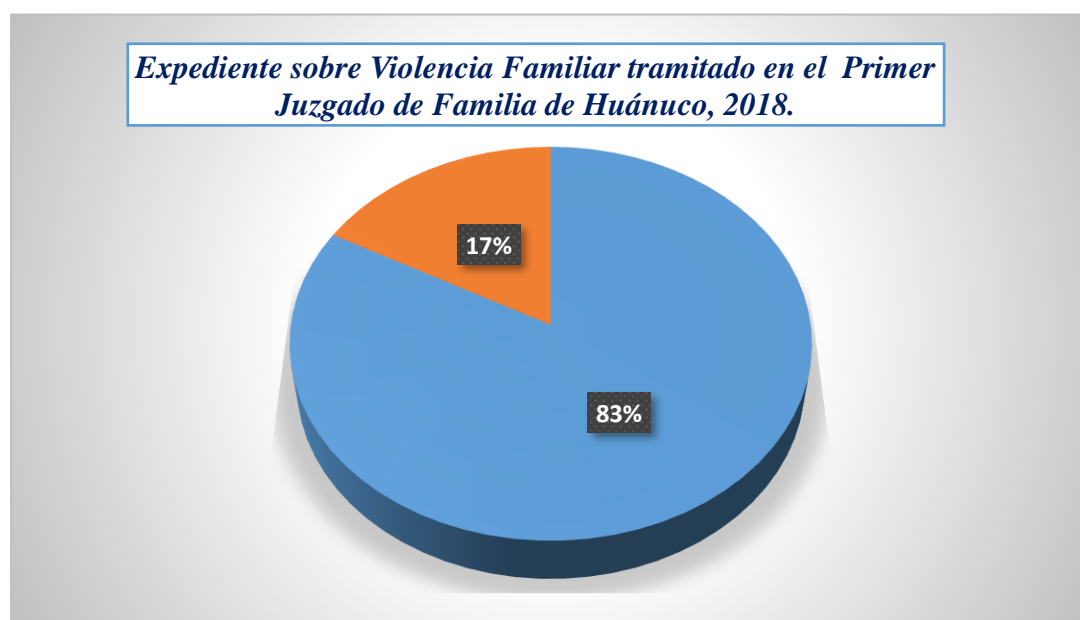
Expedientes sobre Violencia Familiar tramitado en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018	<i>Fi</i>	%
<i>La audiencia de medidas de protección se llevó adelante con la asistencia del denunciado.</i>	<i>01</i>	<i>17 %</i>
<i>La audiencia de medidas de protección no se llevó adelante con la asistencia del denunciado.</i>	<i>05</i>	<i>83 %</i>
<i>TOTAL</i>	<i>06</i>	<i>100%</i>

Fuente: Matriz de Análisis de expedientes sobre Violencia Familiar.

Elaborado: Tesista

Gráfico N° 2

Muestra la asistencia del denunciado en la audiencia de medidas de protección.



Fuente: Matriz de Análisis de los expedientes sobre Violencia Familiar.

Elaborado: Tesista

Análisis e Interpretación

Habiéndose analizado la muestra de la investigación, que consta de 06 expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar; se evidencia un mayor volumen de porcentaje de lo aplicado que el 83% que la audiencia de medidas de protección se llevó adelante sin la asistencia del denunciado; y un porcentaje mínimo del 17% que la La audiencia de medidas de protección se llevó adelante con la asistencia del denunciado.

Conclusión.

El mayor porcentaje de documentos procesados sobre violencia intrafamiliar que la audiencia de medidas de protección se llevó adelante sin la asistencia del denunciado por lo que vulnera el principio de contradicción y tutela efectiva amparada en la constitución política del Perú por lo que muchas veces es afectada el denunciado de manera severa el llevar la medida de protección sin él.

4.3. Contrastación de Hipótesis y Prueba de Hipótesis

Por lo tanto, dentro de las 72 horas más largas del Juzgado Primero de Familia, el derecho a la contradicción del imputado no tendrá un impacto significativo en la audiencia de las medidas cautelares previstas en el artículo 16 de la Ley N ° 30364. de Huánuco, en 2018, debido a que el artículo 16 de la Ley de Prevención, Sanción y Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los Familiares, señaló que dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la denuncia, se utiliza el producto del juzgado de familia o juzgado equivalente para evaluar el caso. Y en la audiencia oral, se decide si emitir las medidas de protección necesarias.

Y, por último, la frecuencia de aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada, es bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia

de Huánuco, 2018, porque el artículo 35 del Reglamento de la Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar nos refiere que solo se necesita la presencia de la víctima o sin ella para poder realizar una audiencia.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 Contrastación de los Resultados del Trabajo de Investigación.

De acuerdo a los resultados obtenidos después de analizados los expedientes el derecho de contradicción de la persona denunciada, no incide significativamente en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, ya que el derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Órgano Jurisdiccional antes citado, en el periodo del año 2018, restándole importancia a las formalidades previstas en la ley para la notificación del denunciado.

Por lo que la resolución que admite a trámite la denuncia interpuesta sobre actos de violencia familiar, limitándose con remitir cédulas de notificación a la Jefa de la Central de Notificaciones de la Corte Superior para que en el día y bajo responsabilidad cumpla con notificar a los sujetos procesales, evidenciándose una clara vulneración del derecho de la persona denunciadas.

Asimismo, de los expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial, 2018, sobre Actos de Violencia Familiar, que la audiencia de medidas de protección se llevó adelante sin la asistencia del denunciado, y que el principio de Tutela jurisdiccional establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, también resulta cierto que los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, tal como lo señala los artículos 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 139 de la Constitución Política del Perú.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

En el Juzgado Civil de Huánuco, período, 2017, conforme se ha analizado los seis expedientes sobre Violencia Familiar, arribamos a las siguientes conclusiones:

1.- El derecho de contradicción del denunciado no tendrá un impacto significativo en la celebración de la audiencia de las medidas cautelares previstas en el artículo 16 de la Ley N ° 30364 en el Juzgado Primero de la Ley N ° 30364 dentro del plazo máximo de la Ley N ° 30364. Huánuco (Huánuco), en 2018, debido a que el artículo 16 de la "Ley para la Prevención, Sanción y Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los Familiares" indicó que en un plazo máximo de 72 horas después de presentada la denuncia, los familiares del juzgado o Con iguales beneficios, se evaluará el caso y se dictarán las medidas de protección necesarias en la audiencia oral.

2.- Que, la eficacia lograda del derecho de contradicción de la persona denunciada, es bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, ya que el juzgado de familia remite el caso al fiscal penal para que inicie el proceso penal en base al Decreto Legislativo 957.

3.- Que, la frecuencia de aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada, es bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, porque el artículo 35 del Reglamento de la Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

6.2. Recomendaciones

Al culminar la investigación, luego de estudiar la muestra y comprobar nuestra hipótesis se recomienda lo siguiente:

1.- Para una mayor incidencia significativa del derecho de contradicción de la persona denunciada, en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, el Juzgado de Familia debe tener mayor consideración al evaluar las medidas de protección y dictar en audiencia ya que debe a ver una debida notificación al denunciado y así habrá igual de parte tutela jurisdiccional por las partes involucradas.

2.- Para una mayor eficacia logrado del derecho de contradicción de la persona denunciada, en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, el Juzgado de Familia debe analizar bien y respetar debe respetar el principio de contradicción que es amparada en la constitución para dar amparo al demandado y se respete su tutela jurisdiccional.

3.- Para una mayor frecuencia de aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada, bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, el artículo 35 del Reglamento de la Ley 30364, el Juzgado de Familia dictan las medidas de protección en caso se advierta una debida notificación al denunciado, con la denuncia y sus recaudos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMADOR HUETE Fania María, FIGUEROA GONTOL Diego David, VELÁSQUEZ ESPINOZA Emilio. (2009). *“Efectos físicos y psicológicos en niños y niñas de 6 a 12 años de edad, que sufren violencia intrafamiliar en los hogares del Barrio Guadalupe del Municipio de Achuapa, departamento de León, en el período de marzo a octubre de 2009”*.
- BRAVO VECORENA Darwin (2018) *“El tratamiento jurídico de la agresión psicológica de la ley N° 30364, en las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de la ciudad de Huánuco, periodo noviembre 2015 – marzo 2016”*.
- CALAMANDREI, P. (1997) *“Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares”*. El Foro, Buenos Aires, 1997.
- CALAMANDREI, P. (2005) *“Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares”*, Ara Editores, Lima.
- CARNELUTTI, Francesco. (1951) *“Teoría Generale del Diritto”*. Edizione Scientifiche Italiane: Roma.
- DE LOS SANTOS, M. (2002) *“Medida autosatisfactiva y medida cautelar”* en Medidas Cautelares, GREIF, J. (Coord.), Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires.
- DE LOS SANTOS, M. (1999) *“Resoluciones anticipatorias y medidas autosatisfactivas”*, en Revista Peruana de Derecho Procesal, N°3.
- HURTADO REYES, M. (2009) *“Fundamentos de Derecho Procesal Civil”*. Idemsa, Lima.
- MARTEL CHANG, R. (2003) *“Tutela Cautelar y medidas autosatisfactivas en el proceso civil”*, Palestra, Lima.

- MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE LA NACIÓN, (2006) *“Manual de Procedimientos de las Fiscalías de Familia”*, Editorial y Gráfica Ebra, Lima.
- MONROY GÁLVEZ, J. (1987) *“Temas de Proceso Civil”*. Studium, Lima.
- MONROY GÁLVEZ, J. (2007) *“Teoría General del Proceso”*. Palestra, Lima.
- MONROY PALACIOS, J. (2002) *“Bases para la Formación de una Teoría Cautelar”*. Comunidad, Lima.
- PELÁEZ BARDALES, M. (2010) *“El Proceso Cautelar”*, Grijley, Lima.
- PEYRANO, J. (2000) *“Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: Tutela de urgencia. Medidas autosatisfactivas”* en Revista Ius et Veritas N° 15.
- PRIORI POSADA, G. (2006) *“La Tutela Cautelar”*. Ara Editores, Lima.
- PRIORI POSADA, G. (2015) *“La reciente reforma del proceso civil peruano”*.
- RAMOS RÍOS, M. (2008) *“Violencia Familiar, medidas de protección para las víctimas de las agresiones intrafamiliares”*. Idemsa, Lima.
- REYES HURTADO, M. (2009) *“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”*. Idemsa, Lima.
- SILVA MUÑOZ, C. (2005) *“Medidas Autosatisfactivas en el Derecho Procesal Peruano”*. Editorial GPZ E.I.R. L, Chiclayo.
- VILELA CARBAJAL, K. (2007) *“La verosimilitud de la pretensión y el prejuzgamiento en las medidas cautelares y medidas anticipadas”*, en Revista de Derecho de la Universidad de Piura, N° 8.
- VILELA CARBAJAL, K. (2014) *“Las medidas cautelares en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”*, en Revista Actualidad Civil, N° 5.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

"EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIADA EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 30364 EN EL PLAZO MÁXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO, 2018"

PROBLEMAS	OBJETIVO	HIPOTESIS	OPERACION DE VARIABLES			
			VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	TÉCNICAS E INSTRUMENTO
<p>PROBLEMA GENERAL ¿Cómo incidirá el derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018?</p> <p>PROBLEMA ESPECÍFICO PE1 ¿Cuál es el nivel de eficacia logrado del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018?</p> <p>PE2 ¿Qué tan frecuentes han sido la aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL Demostrar el grado de incidencia del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018?</p> <p>OBJETIVO ESPECÍFICO OE1 Determinar el nivel de eficacia logrado del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.</p> <p>OE2 Identificar el nivel de frecuencia de aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018.</p>	<p>HIPOTESIS GENERAL El derecho de contradicción de la persona denunciada, no incidirá significativamente en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el primer juzgado de familia de Huánuco, 2018</p> <p>HIPÓTESIS ESPECÍFICOS SH1.- El nivel de incidencia logrado del derecho de contradicción de la persona denunciada, es bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el primer juzgado de familia de Huánuco, 2018</p> <p>SH2.- En el 2018 el nivel de frecuencia de aplicación del derecho de contradicción de la persona denunciada, es bajo en la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364, en el plazo máximo de setenta y dos horas en el primer juzgado de familia de Huánuco.</p>	<p>INDEPENDIENTE El derecho de contradicción de la persona denunciada.</p> <p>DEPENDIENTE En la realización de la audiencia de medidas de protección dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30364.</p>	<p>- Resolución que admite a trámite la denuncia sobre actos de violencia familiar.</p> <p>- Notificación de la persona denunciada</p> <p>- Denuncia sobre violencia familiar presentado por el comisario de la comisaría o por la parte agraviada.</p> <p>- Informe policial remitido por la comisaría</p>	<p>- Se señala fecha y hora para la audiencia especial de medidas de protección en las 72 horas de interpuesta la denuncia.</p> <p>- Se oficia al Instituto de Medicina Legal a fin remita pericia psicológica.</p> <p>- Se remite cédulas a la Jefa de la Central de Notificaciones.</p> <p>- Se autoriza al Técnico Judicial realice notificaciones vía telefónica.</p> <p>- Conduce, opera o maniobra vehículo motorizado.</p> <p>- Pena Privativa de Libertad no menos de seis meses ni mayor de dos años.</p> <p>- Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga.</p> <p>- Pena Privativa de Libertad no menor de uno ni mayor de tres años.</p>	<p>1. Análisis documental.</p> <p>2. Fichaje.</p> <p>3. Matriz de análisis.</p> <p>4. Fichas Bibliográficas de resumen.</p>

MATRIZ DE ANALISIS DE EXPEDIENTES

N°	N° EXPEDIENTES	SE REMITE CÉDULAS A LA JEFA DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES		SE AUTORIZA AL TÉCNICO JUDICIAL REALICE NOTIFICACIONES VÍA TELEFÓNICA		ABSOLUCIÓN DEL DENUNCIADO O DE LOS CARGOS POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA		ABSOLUCIÓN DEL DENUNCIADO DE LOS CARGOS POR VIOLENCIA FÍSICA Y/O OTROS		PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMISARIA		PRESENTADO POR LA PARTE AGRAVIADA ANTE MESA DE PARTES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE		SE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA ESPECIAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS 72 HORAS DE INTERPUESTA LA DENUNCIA		SE OFICIA AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL A FIN REMITA PERICIA PSICOLÓGICA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
01																	
02																	
03																	
04																	
05																	
06																	
SUBTOTAL																	

Fuente: Primer Juzgado de Familia de Huánuco.

Elaborado: Tesista.